

Petróleo y Posconflicto

Por: Sergio Guzmán

Investigador
Universidad Johns Hopkins



www.crudotransparente.com

Calle 26B No. 4A-45 Piso 13, Bogotá, Colombia

Contenidos

Resumen Ejecutivo	3
Introducción	6
Posiciones del ELN y las FARC sobre Petróleo.....	8
ELN.....	8
FARC	9
¿Cuál es Escenario Posconflicto?	10
Panorama Petrolero	10
Falta de Diálogo.....	14
Preparación estatal para el posconflicto.....	15
Preparación empresarial para el posconflicto	21
Preparación de comunidades para el posconflicto	24
¿Qué puede ocurrir en materia petrolera en un escenario posconflicto?	25
Conflictividad Social	25
Extorsión y panorama de seguridad para las empresas.....	28
Sistema General de Regalías y sus críticas	29
Los retos de las empresas ante la Comisión de la Verdad	30
Conclusiones	32
Recomendaciones:	33
Para el Estado:.....	33
Para las empresas:.....	34
Para las comunidades.....	34

Resumen Ejecutivo

El Gobierno de Juan Manuel Santos y la guerrilla Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) dieron inicio a negociaciones de paz en octubre de 2012. La metodología de negociación (“nada esta negociado hasta que todo este negociado”) y comunicación del Gobierno (reserva absoluta de lo que sucede en la mesa de negociación) han hecho que la sociedad esté sumida en la incertidumbre sobre lo que sucede en la mesa de negociaciones y sus implicaciones para el país. Adicionalmente, los anuncios sobre la posibilidad del Gobierno de comenzar negociaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) dan muestras de que el Gobierno tiene intenciones firmes de cerrar el capítulo de la insurgencia en Colombia. Si bien esta es la actitud del Gobierno, no es claro si la sociedad, el sector privado y específicamente la industria petrolera lo acompañan en este objetivo.

Frente a la industria petrolera, el ELN y las FARC se muestran contrarios a la presencia de compañías multinacionales en los territorios y reclaman una agenda nacional petrolera que dé prioridad al medioambiente, la soberanía energética, la redistribución de la participación social en la producción y consumo energético, el desarrollo tecnológico nacional y el fortalecimiento de la actividad gremial y sindical. Contrastan estas actitudes hacia la industria con los actos que cometen estos grupos insurgentes contra ella con la voladura de oleoductos, que causan graves daños ambientales, económicos y sociales, al igual que las acciones extorsivas y secuestros contra los empresarios y trabajadores del sector.

La tendencia a la baja de los precios internacionales del petróleo, junto con las menguantes reservas con las que cuenta el país, pintan un panorama económico muy preocupante. La extracción de crudo juega un papel vital para la economía de Colombia, pues esta representa el 22% de la inversión extranjera en el país, el 52% de las exportaciones y alrededor de 30% de los ingresos fiscales de la nación. La importancia del petróleo para la economía del país y el financiamiento fiscal, junto con la crisis de los precios del petróleo, dejan un ambiente de preocupación sobre el panorama económico.

La posibilidad de que el país entre en una etapa de posconflicto presenta una oportunidad única de discutir de manera amplia y participativa el futuro energético y cómo serán utilizadas las riquezas minerales de la nación para fijar un rumbo de desarrollo territorial sostenible y equitativo. No obstante la falta de confianza entre los distintos actores sociales y económicos de la industria, la carencia de agendas comunes y la ausencia de convocantes que cuenten con credibilidad y legitimidad impiden que se lleven a cabo estas discusiones. A través de las distintas agencias y ministerios, el Gobierno nacional ha mostrado una aproximación a conciencia y seria sobre los desafíos del posconflicto, sin embargo, no ha sabido comunicar bien sus planes y expectativas para la sociedad y el sector privado en cuanto al posconflicto. Ante el ambiente de incertidumbre en las negociaciones y el contexto del mercado petrolero internacional, las empresas no han desarrollado estrategias y planes específicos para contribuir a un marco de actividades posconflicto. Si bien algunas comunidades han desarrollado planes y actividades de reconciliación y desarrollo para el posconflicto, estas necesitan que el Gobierno comunique sus estrategias de financiamiento y apoyo logístico.

Los desafíos que enfrenta la industria petrolera en caso de firmarse los acuerdos con las FARC y el ELN tendrán implicaciones locales, nacionales y regionales. En lo local, el fin de la confrontación armada entre el Estado colombiano y la insurgencia generará una transformación del ordenamiento social colombiano, el cual verá un incremento de los reclamos populares por la falta de presencia estatal, la abundancia de necesidades básicas insatisfechas y las necesidades laborales. Al mismo tiempo, el vacío dejado por los grupos

alzados en armas desmovilizados será aprovechado por organizaciones criminales que atenderán contra la industria a lo largo de la cadena de valor, restándole competencia y haciéndola menos atractiva a los inversionistas. En lo nacional, el Sistema General de Regalías (SGR), implementado en el 2011, revive el debate entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales ya que el Departamento Nacional de Planeación exige mayores requisitos para aprobar el uso de recursos de regalías, muchos de los cuales pueden ser usados para financiar iniciativas de posconflicto. Finalmente en lo internacional, el punto más controversial será si la industria petrolera (y el sector empresarial del país) deciden hacer parte de una comisión de la verdad y hablar sobre el papel que han jugado en la financiación y prolongación de la lucha armada, un evento que podría traer consecuencias judiciales importantes a nivel de casa matriz de las mayores empresas petroleras que han operado en el país.

Que el Gobierno logre firmar acuerdos de paz con las FARC y el ELN representa apenas un primer paso, será fundamental que el país y la sociedad tengan discusiones sinceras abiertas y realistas del rumbo a tomar. En este aspecto, el tema petrolero amerita una discusión más profunda por parte del Gobierno y la sociedad. Este informe pretende ser un instrumento de debate para que los distintos actores puedan comenzar una agenda de trabajo y discusión frente a los desafíos que nos plantea el posconflicto y dar inicio a preparativos para que el posconflicto no nos tome desprevenidos.

Recomendaciones:

Para el Estado:

1. Convocar a las distintas partes a un diálogo nacional sobre la industria petrolera y sus beneficios. Este diálogo deberá incluir a las compañías petroleras, las compañías prestadoras de servicios petroleros, los financiadores de las petroleras tanto nacionales como internacionales, sus accionistas, las entidades regulatorias del Estado, entidades territoriales, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que estén dedicadas a generar espacios de diálogo y paz, la Iglesia, las organizaciones sindicales y obreras, las organizaciones de desarrollo territorial, las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y representantes de los partidos políticos.
2. Comunicar de manera clara y pública cómo los acuerdos logrados en La Habana pueden influir en el funcionamiento de la industria petrolera en Colombia, para así eliminar la incertidumbre y los rumores que rodean los diálogos actuales que se llevan a cabo en la Habana.
3. Publicar la agenda de diálogo tentativa con el ELN y permitir la participación activa de la sociedad civil, en particular de las víctimas del conflicto. Esto también permitirá que las compañías petroleras puedan preparar planes y estrategias para ofrecer propuestas de desarrollo territorial y medidas a adoptar después de concluir los diálogos.
4. Desarrollar mecanismos de comunicación efectiva y preparación a las comunidades que recibirán reinsertados para generar espacios de reconstrucción de tejido social entre excombatientes y civiles.
5. Agilizar los procesos de toma de decisión sobre proyectos de regalías, hacer entrenamientos sobre los procesos de la SGR a los entes territoriales, especialmente a las administraciones municipales y departamentales electas el 24 de octubre de 2015 para que conozcan los mecanismos de gestión de recursos ante el SGR y puedan utilizarlos eficientemente desde el inicio de sus mandatos el 1 de enero de 2016.
6. Continuar apoyando la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, acompañando de manera permanente a las empresas en el territorio y sirviendo como facilitadores del diálogo y la

toma de decisiones. Entendiendo que los conflictos sociales no deben ser solamente arreglados por personas con bagaje técnico, sino deben ser mediados por personas que tengan conocimiento político local y sepan cuáles son las circunstancias que aquejan a los pobladores. Estos proyectos deberían velar por la inclusión de las entidades territoriales en los espacios de diálogo y discusión con las empresas para evitar que los esfuerzos sean duplicados.

7. Considerar beneficios tributarios para empresas que presenten proyectos de posconflicto que vayan alineados con los Programas de Beneficio a las Comunidades (PBCs) requeridas por el Anexo F del contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Para las empresas:

1. Diseñar estrategias para discutir y formular proyectos de desarrollo integral regional a ser implementados durante el período de estabilización del posconflicto que estén alineados con los acuerdos de La Habana. Antes de desarrollar iniciativas de posconflicto locales, se deben hacer proyectos piloto para verificar el seguimiento de los objetivos y aprender importantes lecciones de implementación a ser compartidas por toda la industria.
2. Diseminar públicamente las posiciones de la industria petrolera frente a las negociaciones que actualmente se realizan en La Habana. Si la industria petrolera sería una de las grandes beneficiadas de que cesen los ataques contra la infraestructura petrolera, ¿por qué no apoyar abiertamente una salida negociada al conflicto?
3. Desarrollar estrategia de comunicación pública sobre las posiciones de la industria petrolera frente a las negociaciones con el ELN.
4. Firmar convenios de colaboración con la Agencia Colombiana de Reintegración para entender formas en las cuales la industria puede unirse a las iniciativas de reintegración de desmovilizados.

Para las comunidades

1. Diseñar proyectos de desarrollo sostenible local que puedan ser presentados a los OCAD para financiar obras de beneficio social, articulando las visiones de desarrollos territoriales y alineados con los PBCs de las empresas petroleras. Articular estos proyectos en conjunto con las entidades territoriales para que los planes de y sus planes de desarrollo, planes o esquemas de ordenamiento territorial sean convergentes con las necesidades y prioridades comunitarias.
2. Formar espacios de representación democrática e interlocución permanente con las empresas que tengan la capacidad de articular prioridades a las entidades territoriales. Que estos espacios sean transparentes en cuanto a los objetivos de desarrollo y coherentes con estos en los pliegos de peticiones presentados a las empresas antes de llegar a las vías de hecho.
3. Participar de espacios de diálogo local como la Estrategia Territorial de Hidrocarburos que puedan canalizar las peticiones ante los entes territoriales de forma legítima y acompañada.

Introducción

Los colonizadores españoles encontraron petróleo en Colombia hacia el año 1536, pero no fue hasta 1905 cuando Roberto Mares logró una concesión sobre unos terrenos al sur del río Sogamoso, en el departamento de Santander, que comenzó la exploración petrolera en el país.¹ Para el año 1927 la región del Magdalena Medio, con epicentro Barrancabermeja, por medio de la Tropical Oil Company ya producía cerca de 40.000 barriles diarios.² Este apogeo petrolero representó para algunos el comienzo de una bendición económica, pero para otros fue tan solo el comienzo de una pesadilla de la cual aún no despiertan.

La proliferación de la extracción de hidrocarburos en Colombia ha agudizado los conflictos sociales y económicos desde el siglo anterior y hasta el presente. Como varios académicos han enfatizado, la paradoja de la abundancia de recursos naturales no se ha visto reflejada en el progreso económico y la prosperidad de las personas que habitan las regiones o territorios adyacentes a los yacimientos de hidrocarburos. Todo lo contrario, en estos lugares la pobreza, la degradación ambiental y el abandono estatal sugieren que es el petróleo y no la gente que habita en el territorio lo que importa.

La corrupción que ha ayudado a mantener las instituciones locales débiles ha dificultado también la inversión equitativa o inclusive proporcional de los beneficios de la industria, los cuales habrían podido estimular el desarrollo social y económico. Las decisiones tomadas en concierto por las empresas petroleras y el Estado, con el ánimo de aprovechar el auge del crudo, dejaron de lado los intereses y prioridades de las comunidades locales, lo cual también caldeó los ánimos en contra del centralismo, que permanecen hasta el día de hoy. También el petróleo fue protagonista de las protestas y revueltas obreras de 1924, que hicieron parte del movimiento obrero a nivel nacional y mundial que denunciaban la explotación a la cual eran sometidos los trabajadores por parte de sus patronos extranjeros.

Añadido a esto, destaca el surgimiento de actores armados pertenecientes a la guerrillas de izquierda de las FARC y el ELN, quienes en los años 60 arremetieron fuertemente no solamente contra las petroleras sino contra los terratenientes de las regiones del Magdalena Medio. Estas realizaron un sinnúmero de secuestros, extorsiones y asesinatos selectivos en contra de la industria, exacerbando así el conflicto. Incluso se comenta que los actores armados no estatales, por medio de negociación, amenaza o violencia sobre las instituciones locales, han venido apropiándose del reparto de regalías.³

Los descubrimientos petroleros de los 80s y 90s en Caño Limón, Arauca, como también Cupiagua y Cusiana, Casanare, arrastraron consigo la misma conflictividad que el petróleo había ocasionado en el Magdalena Medio e inclusive esta fue llevada a un nuevo extremo con la proliferación de los grupos paramilitares financiados por aquellos quienes habían sufrido la extorsión y actos delictivos de las guerrillas de izquierda. Los paramilitares han sido responsables de un incremento en el número de muertos asociados al movimiento obrero, los cuales en algunos casos puntuales han sido relacionados a empresas petroleras. La ausencia y/o debilidad estatal ha sido un factor constante en los territorios donde se descubren y explotan hidrocarburos. Esto ha contribuido a la ebullición de conflictos entre las empresas y los residentes locales, estos últimos asumiendo que las empresas, con sus hondos bolsillos, realizarían contratación de personal local y traerían consigo desarrollo y progreso.

¹ Molano Bravo, Alberto. En Medio del Magdalena Medio. Centro de Investigación y Educación Popular, Cinep. Bogotá, Colombia. Diciembre de 2009. p. 27.

² *Ibid*, p. 27.

³ Avellaneda Cusarúa, José Alfonso. "Petróleo, ambiente y conflicto en Colombia" Guerra Sociedad Y Medio Ambiente. En: Colombia ISBN: 958-8101-17-4 ed: Foro Nacional Ambiental, v.1, Disponible en: <http://library.fes.de/pdf-files/bueros/kolumbien/01993/11.pdf>. 2004 p.488.

Los hallazgos petroleros resultaron ser de suma importancia fiscal, tanto así que el entonces presidente de Ecopetrol, Andrés Restrepo, consideró que sin el descubrimiento de estos yacimientos “habría sido muy difícil financiar los derechos civiles incluidos en la Constitución de 1991”⁴. El petróleo ha sido desde 1991 fundamental para las finanzas de la nación y ha dado pie tanto para la inversión social como para el despilfarro. La bonanza petrolera también atrajo a los grupos insurgentes, quienes mediante extorsiones, secuestros y voladuras a los oleoductos que transportaban el petróleo buscaron sacar tajada para financiar su revolución.

Como menciona el jefe máximo del ELN, Nicolás Rodríguez Bautista (Alias Gabino), la guerrilla mantendrá una ofensiva hacia la infraestructura petrolera: “Lo digo con dolor en el alma. Prefiero que el petróleo se derrame en nuestro territorio a que se lo lleven las empresas extranjeras de la manera anti-patria como lo están haciendo. Mantenemos la política de atentar contra el oleoducto mientras continúe desarrollándose la política de involucramiento de las empresas petroleras en la guerra sucia”⁵.

Las FARC no han sido menos crueles con la infraestructura petrolera. En un comunicado reciente, desde la mesa de negociaciones en La Habana, Luis Eliécer Rueda Vernaza, alias Matías Aldecoa, mencionó que el objetivo primordial detrás de los ataques ha sido “golpear la confianza inversionista”.⁶ Tras la desmovilización de los grupos paramilitares en el 2006, surgieron actores narcotraficantes y criminales llamados Bandas Criminales (BACRIM), quienes también han tenido como blanco de hostigamientos y extorsiones a la industria petrolera⁷.

El petróleo ha sido tan importante para los actores insurgentes y criminales que lo han utilizado sin vergüenza como arma de destrucción masiva, según la Asociación Colombiana de Petróleo. En los últimos 30 años, las guerrillas de las FARC y el ELN, han derramado en nuestro país más de 4 millones de barriles de crudo, el equivalente a 15 veces el famoso derrame del Exxon-Valdez⁸. Sin embargo, esta tragedia ambiental realizada en una campaña progresiva de las guerrillas ha permanecido en el silencio, con escasa atención nacional e internacional, pero con innumerables víctimas de flora, fauna y ciudadanos inocentes, en su mayoría pobres.

Hoy, entre la industria petrolera y las comunidades que ocupan los territorios que contienen hidrocarburos, hay una relación de poder asimétrica en donde las comunidades tienen poca voz y voto en el ordenamiento territorial. Sus frustraciones a menudo son canalizadas por medio de vías de hecho, bloqueos, paros y protestas, las cuales detienen temporalmente la extracción de recursos obligando a las empresas, los entes territoriales y el Gobierno nacional a negociar las peticiones de las comunidades. Sin embargo, estas soluciones coyunturales son aprovechadas por las comunidades y sus líderes para solicitar prebendas y dadas a la industria o amenazarlos con continuar los bloqueos. Esta situación se ha

⁴ “El hallazgo de Cusiana.” *Dinero*. El Hallazgo de Cusiana. 21 de Agosto de 2013. Disponible en: <http://www.dinero.com/edicion-impresa/caratula/articulo/el-hallazgo-cusiana/182421>

⁵ Avellaneda Cusarúa. *op. cit.*, p. 492.

⁶ Betín del Río, Tomas. Farc quieren “golpear la confianza inversionista”. *El Heraldo*. 2 de Julio de 2015. Disponible en: <http://www.elheraldo.co/nacional/farc-quieren-golpear-la-confianza-inversionista-203181>

⁷ Massé, Frédéric y Camargo Castro Johanna. “Actores Armados Ilegales y el Sector Petrolero del Meta”. Informe Monográfico. CITpax Colombia. 2013. Disponible en: http://www.academia.edu/9300997/Actores_armados_ilegales_y_sector_petrolero_en_el_Meta p. 9.

⁸ “4 Millones de barriles han derramado FARC y ELN en 30 años.” *El Colombiano*. 1 de Julio de 2015. Disponible en: <http://www.elcolombiano.com/4-millones-de-barriles-de-crudo-han-derramado-farc-y-eln-en-los-ultimos-30-anos-EB2232723>

incrementado desde la desmovilización paramilitar y puede jugar un papel coercitivo hacia la industria y las finanzas estatales de cara a un eventual acuerdo de paz con las FARC.

La industria de hidrocarburos es protagonista del conflicto colombiano, por acción, omisión e inercia. En el actual contexto, de unas negociaciones de paz con las FARC que están en un punto clave y unas negociaciones con el ELN que están estancadas, la pregunta hacia el sector petrolero es ¿cómo se están preparando para enfrentar un eventual posconflicto y si este prevé algunos cambios en el modelo de negocios del sector petrolero o de su gestión de responsabilidad social empresarial?

Esta investigación abre la posibilidad de pensar estratégicamente sobre el negocio petrolero en Colombia, aprovechando un ambiente de seguridad más favorable que va a permitir expandir las áreas de exploración y producción hacia lugares donde anteriormente hacían presencia actores armados ilegales. Pero también, más allá del sector petrolero, permite explorar las medidas que se están planteando desde los distintos actores (Gobierno, sociedad civil e industria), de cara a unas negociaciones de paz que, de ser exitosas, presentan una oportunidad para combatir las principales causas de violencia y pobreza en el país.

Posiciones del ELN y las FARC sobre Petróleo

ELN

Para el ELN el tema petrolero es central en su actividad insurgente⁹. Según los comunicados del bloque oriental que es aquel que actúa en Arauca, Boyacá y Casanare, el movimiento guerrillero quiere que las empresas reflexionen sobre su papel en el conflicto -sin esta clase de reconocimiento no habrá una paz en los territorios- y piden que si no lo hacen las empresas, que por lo menos lo haga el Estado¹⁰. Por otro lado, la influencia del ELN en algunas zonas productoras de petróleo es innegable. Según el reporte del centro de pensamiento International Crisis Group *¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálogos de Paz en Colombia*, “el ELN también mantiene su antigua influencia política en Arauca, donde presuntos vínculos con políticos regionales y locales le permiten tener un control significativo sobre el presupuesto, incluidas las regalías de la explotación petrolera”¹¹.

La inclusión de los recursos naturales en el debate político será la principal demanda política del ELN¹². Sin embargo, según un analista del conflicto en Colombia, “el ELN también podría vivir sin que el tema del petróleo esté en la mesa, puede que el Gobierno les haya dicho rotundamente que no va a ser posible colocar este tema en la mesa y esto les haga desistir del tema. Una negociación es viable y puede abrir caminos de negociación”¹³. Pero advierten que “la inclusión [del tema petrolero] en las conversaciones con el ELN podría molestar a las FARC y poner en peligro la coherencia de La Habana, lo cual complicaría el desarrollo de una visión compartida de la transición hacia la paz” y también podría poner en duda la permanencia de muchas empresas del sector en Colombia¹⁴.

⁹ Se puede leer más sobre la filosofía del ELN sobre el petróleo en el estudio de la Fundación Ideas para la Paz que examinan “El ELN y la Industria Petrolera: Ataques a la infraestructura en Arauca.” Abril de 2015. Disponible en: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/55411b8a3ccab.pdf>

¹⁰ Entrevista del Autor, analista internacional de conflicto en Colombia, Bogotá, 13 de Julio de 2015.

¹¹ Crisis Group, “¿Abandonado a su suerte? El ELN y los diálogos de Paz en Colombia”. Informe de Crisis Group sobre América Latina No. 51, 26 de Febrero de 2014. Disponible en: http://www.crisisgroup.org/en/publication-type/media-releases/2014/latam/left-in-the-cold-the-eln-and-colombia-s-peace-talks.aspx?alt_lang=es p. 7.

¹² *Ibid*, p. 19.

¹³ Entrevista del Autor, analista internacional de conflicto en Colombia, Bogotá, 13 de Julio de 2015.

¹⁴ Crisis Group, *op. cit.*, p. 19.

EL ELN ha tenido fuertes pronunciamientos sobre el impacto negativo de la industria extractiva con las comunidades y el medioambiente.¹⁵ Serían entonces proclives a negociar si los temas de recuperación de medioambiente y temas de desarrollo comunitario en áreas de influencia directa estuviesen incluidos en una posible agenda¹⁶.

En 1999, en el marco de las negociaciones que se dieron con las FARC en el Caguán, la Redepaz compiló una serie de propuestas de diversos actores de Gobierno, sindicatos, académicos y sociedad civil sobre la industria petrolera y su papel en la paz. En ella también se recogen propuestas del ELN y de las FARC. En este documento el ELN recoge sus principales cuestionamientos frente al estado de la política minero-energética de finales de los 90 y algunos de sus postulados pueden aplicar a la coyuntura actual. Critican la inexistencia de una ley integral de energía, la falta de planificación del sector petrolero, la dependencia de capacidad refinadora extranjera primando un modelo de exportación¹⁷. El documento también da una serie de interpretaciones de la guerrilla sobre la distribución de las regalías y la renta petrolera entre las compañías extranjeras y Ecopetrol. Argumentan que los contratos dejan unas pérdidas importantes a la nación. Aunque esta interpretación está basada en datos ya obsoletos, el punto de fondo es que el ELN opina que el país no está obteniendo los beneficios económicos que merece. Del mismo modo, se manifiestan en contra de la privatización de Ecopetrol y condenan la práctica de “seguir vendiendo pedazos de nuestra patria al extranjero”¹⁸. Proponen un nuevo Plan Energético Integral Nacional, el cual priorice la soberanía energética, la redistribución de la participación social en la producción y consumo energético, el desarrollo tecnológico nacional y el fortalecimiento de la actividad gremial y sindical¹⁹.

FARC

Las FARC manejan una propuesta petrolera significativamente más reducida y detallada que la del ELN: despotrican de la privatización de la empresa estatal y las contribuciones financieras de Ecopetrol a las Fuerzas Militares²⁰. Sin embargo, como lo atestiguan los puntos de negociación en La Habana, ni el tema minero-energético, ni el modelo de desarrollo económico está sujeto a la negociación. El tema que sí preocupa a las FARC es aquel relacionado con el ordenamiento territorial, una nueva Reforma Rural Integral y “el establecimiento de programas especiales de desarrollo con enfoque territorial”²¹. Es una iniciativa para “reconstruir las regiones más afectadas por el conflicto y la pobreza con verdaderos planes de desarrollo que transformen esos territorios, garanticen derechos y faciliten la reconciliación”²². Buscan crear espacios de participación ciudadana para construir planes de acción para la transformación regional.

Es posible que las FARC busquen construir espacios de interlocución con el gobierno local y las comunidades, aprovechando la inconformidad de las comunidades frente al tema

¹⁵ *Ibid*, p. 19.

¹⁶ *Ibid*, p. 20.

¹⁷ ELN, “Una propuesta energética del ELN” en *Petróleo en las Conversaciones de Paz*, 1999, Redepaz, p.185.

¹⁸ *Ibid*, p. 192.

¹⁹ *Ibid*, p. 192.

²⁰ FARC en *Petróleo en las Conversaciones de Paz*. *op. cit.*, p. 204.

²¹ Alto Comisionado para la Paz, ¿Qué se ha Acordado en la Habana? Junio de 2014. Disponible en:

<http://goo.gl/ocS4fo>

²² *Ibid*.

petrolero, pero va a ser muy difícil ganar la confianza de las comunidades, especialmente aquellas que han sido víctimas de los recientes ataques contra la infraestructura petrolera²³.

¿Cuál es el escenario de posconflicto?

Es una actitud generalizada que si se llega a firmar un acuerdo de paz con las FARC el conflicto colombiano no acabará, más bien se transformará. Es por esto que muchos actores prefieren hablar de un marco de análisis posacuerdo que un marco posconflicto, teniendo en cuenta que los enfrentamientos del Estado contra el ELN y un sinnúmero de bandas criminales narcotraficantes, como el Clan Úsuga, persisten. Si bien es cierto que las causas estructurales del conflicto colombiano van a persistir, con o sin acuerdo, la oportunidad que presenta un acuerdo de paz con el grupo insurgente más antiguo y más grande del país presenta oportunidades importantes para dar una trayectoria de inclusión y prosperidad a la nación. Por esto es que el presente informe utilizará la palabra posconflicto a lo largo de este documento para referirse al período que tendrá que vivir el país luego de los acuerdos de paz con las FARC.

Panorama Petrolero

Países con abundancia de recursos naturales, como Colombia, corren el riesgo de caer en la llamada maldición de los recursos, al tiempo que son extremadamente vulnerables a la “enfermedad holandesa,” donde una dependencia de un recurso que presenta una caída de precios puede paralizar la economía de un país. En Colombia, el precio del petróleo tiene una relación directa con la actividad productiva, ya que afecta la estabilidad fiscal y cambiaría²⁴. (ver Tabla 1)

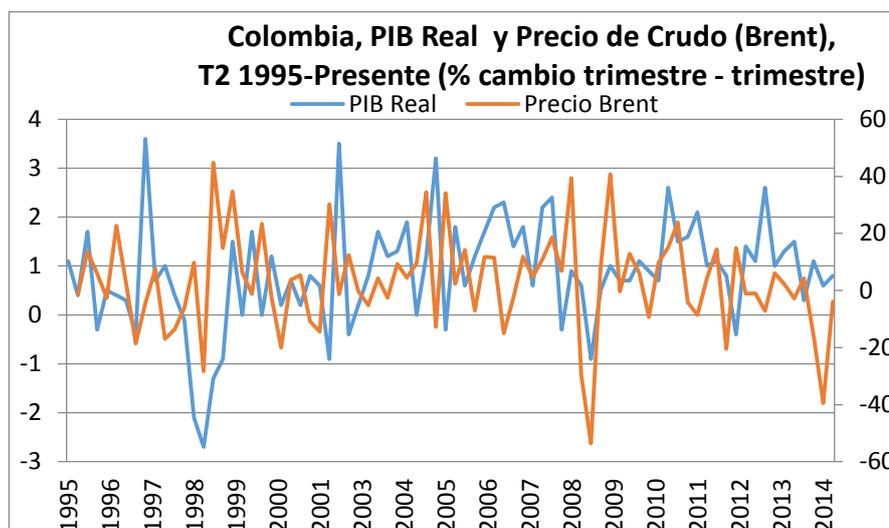


Tabla 1: Esta tabla muestra los cambios del precio del crudo internacional, contrastados con el crecimiento trimestral del país, nótese que las caídas trimestrales de los precios de crudo significativas coinciden con momentos de crisis económica, 1998, 2008 y 2014. Fuente: Bloomberg.

²³ Entrevista del Autor, investigador y director de centro de pensamiento, Barrancabermeja, 28 de Julio de 2015.

²⁴ Para un análisis minucioso sobre la relación entre el precio del crudo y el crecimiento, se recomienda leer el informe de Juan Ricardo Perilla Jimenez, “El Impacto de los Precios del Petróleo Sobre el Crecimiento Económico en Colombia.” Revista Economica Universidad El Rosario. 2010. Disponible en: http://www.banrep.gov.co/sites/default/files/eventos/archivos/Seminario35_0.pdf

Esto es un fenómeno que es extremadamente problemático para Colombia en el marco del posconflicto. Si bien cuando las negociaciones de paz en La Habana iniciaron cuando el país se encontraba en una época de crecimiento del 6,6% y tenía unas finanzas bajo control, hoy el panorama es muy distinto, tanto por la devaluación como por los precios del petróleo, que cayeron de un promedio de US\$ 114 dólares a US\$ 47 hoy en día (ver Tabla 2)²⁵. Teniendo en cuenta que la renta petrolera se corresponde por concepto de Impuestos, Regalías, y Dividendos a aproximadamente el 33% de los ingresos de la Nación, y el petróleo corresponde el 52% de las exportaciones, el panorama fiscal para financiar el posconflicto es preocupante.

Los precios internacionales del petróleo tienen una tendencia a la baja por factores como los nuevos yacimientos de gas encontrados en Estados Unidos, Australia, Argentina, Brasil y Canadá, entre otros; el incremento de la producción de hidrocarburos de fuentes no convencionales y fuentes alternativas de energía, y las tecnologías de re-potenciamiento de pozos, permitiendo incrementar la eficiencia de pozos existentes²⁶. Más aún, el acuerdo nuclear del P5+1 con Irán, que permitirá a esta nación persa vender su crudo internacionalmente, y la reapertura de México a la inversión extranjera en su industria petrolera vaticinan una abundancia de crudo en el mercado, corroborando una tendencia de precios bajos.

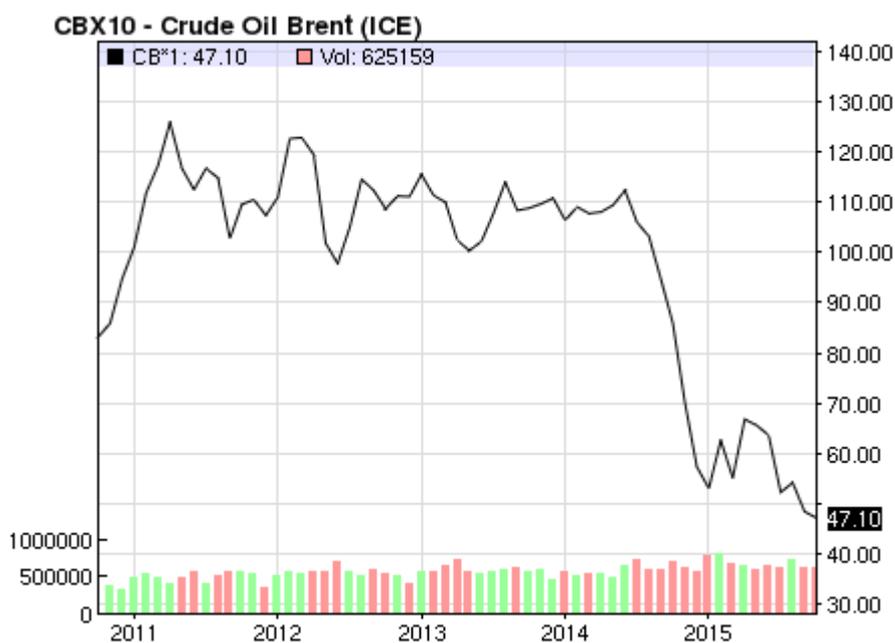


Tabla 2 - Precios Petróleo (Brent) 2011 – Octubre 2, 2015.

Fuente: NASDAQ.

Añadido a esto, no solo son los menguantes precios internacionales del crudo los que preocupan al sector y al Gobierno, sino la creciente conflictividad social que rodea al petróleo. Menciona The Economist Intelligence Unit que, “dado el ambiente de tensión entre las comunidades locales, es altamente probable que ellos terminen protestando por la presencia de inversiones petroleras, e inclusive pueden detener las operaciones de producción no

²⁵ Vega Barbosa, Camilo. “¿Sin petróleo no hay paz?” *Blogs El Espectador*. 30 de Mayo de 2015. Disponible en: <http://blogs.elespectador.com/el-mal-economista/2015/05/30/sin-petroleo-no-hay-paz/>

²⁶ PNUD, “Colombia frente a una destorcida en los precios del petróleo,” 7 de Noviembre de 2014. Disponible en: <http://www.co.undp.org/content/colombia/es/home/presscenter/articles/2014/11/07/colombia-frente-a-una-destorcida-en-los-precios-del-petr-leo.html>.

convencionales en los próximos años”²⁷. El crecimiento de esta conflictividad obedece a múltiples factores que analistas consultados para este informe atribuyen al empoderamiento de las comunidades luego de la desmovilización paramilitar, la lentitud de los entes territoriales en ejecutar los recursos de las regalías, los altos índices de necesidades básicas insatisfechas, la falta de cumplimiento de compañías petroleras en los acuerdos de contratación de personal local, la presencia de actores armados que se benefician políticamente de manifestaciones sociales y las pretensiones de algunos líderes para recibir dádivas de las compañías petroleras o el Estado, entre otros. Estos bloqueos, vías de hecho y manifestaciones populares detienen temporalmente la explotación y extracción petrolera, dificultando que el Gobierno colombiano mantenga su meta de producción de 1 millón de barriles de petróleo diarios. De hecho, en el 2014, Ecopetrol dejó de producir 28.000 barriles diarios por razones de entorno, incluyendo protestas y bloqueos ²⁸.

La industria petrolera también ha sido víctima de constantes ataques de la guerrilla y otros grupos armados al margen de la ley. Estos, como lo menciona la Fundación Ideas para la Paz, obedecen a motivos económicos, sociopolíticos y militares ²⁹. Económicos porque los atentados a la infraestructura petrolera son acciones extorsivas para financiar las actividades militares donde la falta de pago de extorsiones es castigada con atentados ³⁰. Sociopolíticos porque atentan con actores que ellos consideran que han explotado la riqueza y soberanía nacional, dándoles relevancia política a sus acciones ³¹. Finalmente militar porque demuestra capacidad de acción por parte de la guerrilla y obliga al desplazamiento del Ejército hacia posiciones defensivas de la infraestructura petrolera restándole capacidad ofensiva ³². Algunos incluso manifiestan que los actores armados ganan influencia local realizando atentados porque las labores de reparación y gestión ambiental generan empleo ³³.

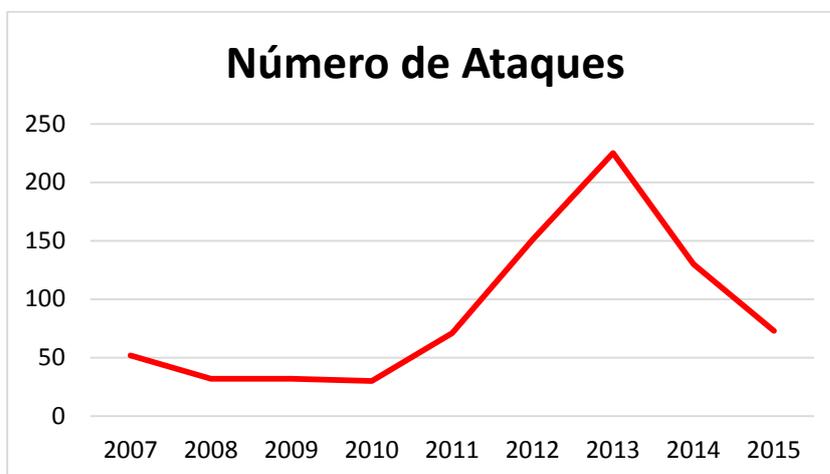


Tabla 3: Histórico de ataques a la infraestructura petrolera.
Fuente: Ecopetrol

²⁷ “Oil sector faces difficult future.” *The Economist Intelligence Unit*. 27 de octubre de 2014.

²⁸ “Ecopetrol dejó de producir 64.000 barriles diarios en 2014,” *El Tiempo*, 26 de marzo de 2015.

Disponible en: <http://www.eltiempo.com/economia/empresas/asamblea-de-ecopetrol/15467596>

²⁹ Fundación Ideas para la Paz. *El ELN y la Industria Petrolera: Ataques a la infraestructura en Arauca*. Abril de 2015. Disponible en: <http://cdn.ideaspaz.org/media/website/document/55411b8a3ccab.pdf> p.7.

³⁰ *Ibid*, p. 8.

³¹ *Ibid*, p. 8.

³² *Ibid*, p. 9.

³³ *Ibid*, p. 36.

Las numerosas acciones de las guerrillas contra la infraestructura petrolera elevan los precios de producción y transporte del crudo y generan muchos peligros para la exploración en áreas que no cuentan con las condiciones de seguridad necesarias para las compañías. Aunque los atentados a la infraestructura han disminuido (en el 2013 hubo 225; en el 2014 hubo 136, y en lo corrido del 2015 ha habido 73), siguen siendo un impedimento importante para la industria (Ver Tabla 3) ³⁴. Según la ACP, los ataques a la infraestructura petrolera redujeron la producción anual de crudo en un 3% ³⁵. Según Agora Consultores, en el 2015 estos ataques hicieron que la industria petrolera dejara de producir 6.014.794 barriles ³⁶. El número de ataques a la infraestructura petrolera antes, durante y después de la tregua (Ver Tabla 4) dan a entender que la industria sería una de las beneficiarias de un acuerdo entre las FARC y el Gobierno; sin embargo, no es claro porque la industria no apoya inequívocamente los diálogos de paz.

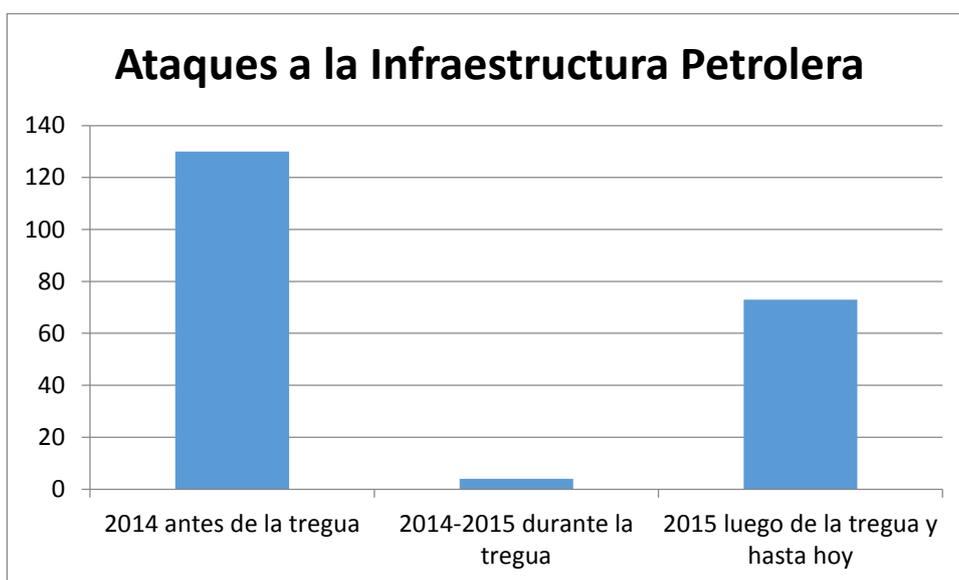


Tabla 4: Fuente: *Ágora Consultores*³⁷

La crisis del precio del petróleo a nivel mundial, junto con el aumento de la conflictividad social y las acciones de los grupos armados al margen de la ley sobre la infraestructura petrolera, oscurecen el panorama petrolero del país. Por sus insignificantes reservas petroleras, poco puede hacer el país para influir sobre el precio internacional del crudo. Sin embargo, hay importantes medidas que se pueden tomar para armonizar los aspectos comunitarios por medio del mejoramiento de iniciativas de responsabilidad social y

³⁴ "Disminuyen atentados a la industria petrolera." *Portafolio*. 1 de Marzo de 2015. Disponible en: <http://www.portafolio.co/negocios/merman-ataques-petroleras-colombia-febrero-2015> y

³⁵ "Colombia vive una 'tragedia ambiental silenciosa' por los atentados petroleros". *Diario Las Américas*. 1 de Julio de 2015. Disponible en: http://www.diariolasamericas.com/5051_portada-america-latina/3198050_colombia-vive-una-tragedia-ambiental-silenciosa-por-los-atentados-petroleros.html

³⁶ "Ágora presenta su informe de seguridad 73 ATENTADOS A INFRAESTRUCTURA PETROLERA EN 2015" *Inteligencia Petrolera*. 1 de Septiembre de 2015. Disponible en: <http://inteligenciapetrolera.com.co/inicio/agora-presenta-su-informe-de-seguridad-73-atentados-a-infraestructura-petrolera-en-2015/>

³⁷ Ataques contra la industria petrolera en Colombia, 2014 vs 2015. Boletín *Ágora Consultores*. Disponible en: <http://inteligenciapetrolera.com.co/inicio/wp-content/uploads/2015/05/ATAQUES-CONTRA-LA-INDUSTRIA-PETROLERA-EN-COLOMBIA-2015-Vs-2014-A-ABRIL-1.pdf>

diálogo (los cuales serán profundizados en este informe) y reducir los ataques del ELN y las FARC a la infraestructura petrolera como un importante componente de los eventuales acuerdos de paz con estos actores.

Falta de Diálogo

Los recursos naturales no renovables y lucrativos suelen ser comunes en sociedades en conflicto. El manejo de los recursos ha sido, en muchos lugares, una fuerza desestabilizante que genera corrupción, desequilibrio económico y conflicto sobre el control y distribución de los recursos. El Instituto de Paz de los Estados Unidos, en su documento de Principios Guía para la Estabilización y Reconstrucción, presenta una doctrina civil para las misiones de construcción de paz y promueve herramientas prácticas para ayudar a que los países hagan una transición del conflicto a la paz basada en las experiencias de importantes diplomáticos estadounidenses alrededor del mundo en misiones de estabilización y reconstrucción en la posguerra. Según este documento, “el manejo de la riqueza de los recursos naturales debe estar contenido en los acuerdos de paz, constituciones u otros aspectos del proceso de acuerdo”³⁸. Esto justamente porque los recursos naturales como la tierra, el agua, los hidrocarburos y la riqueza mineral son factores que pueden agudizar los conflictos. Es por esto que durante un periodo de estabilización se debe entender el contexto de recursos naturales antes de diseñar una estrategia para ellos y también se debe prevenir que “actores predadores” puedan tener control o injerencia sobre los recursos naturales, áreas ricas en recursos naturales o las instalaciones de producción³⁹. Es por estas razones que los asuntos petroleros y de recursos naturales tienen que formar parte de una discusión nacional sobre el uso de la riqueza natural del país en un escenario de posconflicto. Esta discusión debería ser participativa y requerirá de “la industria extractiva, sus banqueros, la comunidad financiera internacional, organizaciones regionales y donantes internacionales”⁴⁰. Sería de igual forma importante involucrar a las entidades territoriales quienes han tomado una actitud pasiva frente al incremento de la protesta social y tendrán un papel importante que realizar en las labores preventivas.

Una discusión de este calibre desafortunadamente no se ha dado en Colombia debido al fraccionamiento de los actores y los distintos intereses que rodean la industria petrolera en el país. Un ejemplo que sirve para clarificar este fenómeno es el siguiente:

Por un lado, se encuentran en el Comité Minero Energético (CME) representantes de dieciséis compañías petroleras y mineras, siete agencias del Estado, cuatro embajadas y cinco representantes de la sociedad civil (ninguna de las cuales representa organizaciones de base o de los territorios donde provienen los recursos). En este foro se discuten temas de coyuntura y también de estructura de la industria petrolera. Estos temas incluyen: empresas y fuerza pública, política pública de la industria minero-energética, comunicación, verificación de buenas prácticas y compromisos y, finalmente, el tema de extorsión y secuestro⁴¹. En esta instancia de diálogo repetidamente se hace un llamado a involucrar actores de la sociedad civil.

Por otro lado, se reúne el Dialogo Nacional Minero Energético con participación de organizaciones de la sociedad civil territoriales, algunas empresas estatales, la Unión Sindical Obrera (USO), entidades del Estado invitadas como la Agencia Nacional de Hidrocarburos

³⁸ United States Institute for Peace (USIP). “Guiding Principles for Stabilization and Reconstruction”. USIP Press. Noviembre de 2009. Disponible en: <http://www.usip.org/publications/guiding-principles-stabilization-and-reconstruction> p. 114.

³⁹ *Ibid*, p. 147.

⁴⁰ *Ibid*, p. 148.

⁴¹ Entrevista del Autor, Funcionario de Industria Petrolera, Bogotá, 17 de Julio de 2015.

(ANH) y la Unidad de Política Minero Energética (UPME), y otras entidades de apoyo como la Red Avina, para discutir temas de gobernanza colaborativa de los recursos naturales, relaciones obrero-patronales, iniciativas de paz y utilización de los recursos de la renta minero-energética para el desarrollo ⁴². En esta instancia de diálogo se hace un llamado al mayor involucramiento del sector empresarial.

Adicionalmente la USO, a través de su II Asamblea Nacional por la Paz ha intentado incluir los temas de política minero-energética y de desarrollo regional en un marco de pos-acuerdo. Esto en un intento de llevar el debate hacia los territorios y que se forjen propuestas comunitarias de política pública⁴³. A pesar de que este esfuerzo ha sido acompañado por el Ministerio de Trabajo, no contó con la convocatoria conjunta de Ecopetrol o del sector empresarial, lo cual disminuye las posibilidades de un consenso. Sumado a esto, se propone llevar a cabo esta serie de eventos durante la época electoral, lo cual complica el panorama. Es de destacar que la USO a través de sus muchos comunicados, tweets y estados en las redes sociales utiliza métodos de expresión que, aunque defienden sus afiliados y sientan posiciones de debate, le restan confianza entre el empresariado. Por ejemplo, acusa a empresas como Mansarovar de perseguir militarmente el movimiento sindical, señala al presidente de Ecopetrol de establecer una “guerra frontal contra el sindicato”, constantemente alega que Ecopetrol miente a sus empleados y organiza eventos de solidaridad con Cuba para mostrar “la realidad de lo que ocurre en la isla” ⁴⁴.

Queda claro entonces que no faltan instancias de diálogo, lo que falta es que todos los actores participen en las distintas instancias de diálogo a partir de la creación de una agenda común que permita abordar los temas de mutuo interés. Parte del problema es la falta de un actor convocante que cuente con legitimidad ante todos los distintos actores. Este papel debería ejercerlo el Gobierno nacional a través de sus múltiples agencias encargadas del tema de hidrocarburos.⁴⁵

Preparación estatal para el posconflicto

El Gobierno ha destinado un presupuesto de 9 billones de pesos al año para el posconflicto. Para algunos, como el ministro de Hacienda, Mauricio Cárdenas, o el senador Antonio Navarro Wolff, esta cantidad es suficiente, mientras para otros como Francesco Bogliacino, profesor de Economía de la Universidad Nacional, se quedará corta frente a la inmensidad de los retos ⁴⁶. Lo claro es que con el bajón de los precios del petróleo y la inestabilidad por la que atraviesan los mercados internacionales, no hay un panorama fiscal

⁴² Entrevista del Autor, coordinadores Diálogo Nacional Minero Energético, Bogotá, 2 de Julio de 2015.

⁴³ *Ibid.*

⁴⁴ Proveniente de tweets de @usofrenteobrero, Agosto de 2015.

⁴⁵ Expertos del Centro para el Desarrollo Global llevaron a cabo amplios diálogos con la sociedad en Tanzania para discutir y debatir que debería suceder con los depósitos de gas recién encontrados. Encontraron que discutir estos temas con la población tuvo impactos significativos en cuanto al conocimiento de la gente sobre los recursos naturales. Los participantes de estos sondeos también manifestaron su entusiasmo por participar de primera mano en iniciativas de transparencia y rendición de cuentas. Sería interesante para el país utilizar estas experiencias para trazar algún tipo de proyecto piloto relacionamiento comunitario sobre el tema de hidrocarburos. Para mayor información sobre estos diálogos, se recomienda escuchar el podcast de Justin Sandefur sobre las ventajas de la democracia deliberativa y la dependencia de recursos naturales. Disponible en:

<http://www.cgdev.org/blog/can-deliberative-democracy-cure-resource-curse-podcast-justin-sandefur>

⁴⁶ Gonzales, Sergio David. “Los Retos Presupuestales del posconflicto.” *El Espectador*, 10 de Agosto de 2015. Disponible en: <http://www.elespectador.com/noticias/economia/los-retos-presupuestales-del-posconflicto-articulo-578231>

tranquilizador. Aun así, el Gobierno tiene que proseguir con sus preparativos para el escenario de posconflicto.

En agosto de 2014, fue conformado el Ministerio de Posconflicto integrado por las direcciones de derechos humanos, minas antipersonal, seguridad y posconflicto. El propósito de este Ministerio es formular, estructurar y coordinar las políticas y programas relacionados con el posconflicto, así como asesorar para modernizar los modelos de seguridad, desmovilización y reintegración. Dentro del Ministerio, la Dirección de Posconflicto tiene la función de articular la visión de construcción de paz luego de la firma de los acuerdos de paz con las FARC, especialmente durante el periodo de estabilización que ocurrirá durante los 12-18 meses posteriores a una eventual firma de los acuerdos.

Se sabe que los empresarios jugarán un importante papel en la implementación de iniciativas de paz y, en este orden, la dirección de posconflicto de este Ministerio trabaja en cuatro líneas distintas con el sector empresarial: 1) Liderazgo y narrativa, que busca reconocer una corresponsabilidad de todos los sectores del país para lograr la paz. 2) Acción sin daño, que busca que las empresas interioricen los conceptos de prevención, mitigación y reparación de daños y se comprometan a que sus prácticas de negocios no causen malestar en donde operan. 3) Acciones público-privadas para la democracia y el desarrollo que esperan impulsar la planeación participativa en el eventual posconflicto para que la empresa privada se una a otras iniciativas locales. 4) Empresas y reconciliación haciendo un llamado a la participación empresarial en las áreas de reintegración de excombatientes y memoria histórica ⁴⁷. Según un funcionario de una embajada extranjera, es claro que el posconflicto implica unas responsabilidades para las empresas, pero no está aún claro cuál es el papel que se espera que jueguen en la implementación de los acuerdos ⁴⁸.

El Ministerio y sus funcionarios están tratando de lograr acercamientos con los empresarios y exponer maneras en las que ellos pueden ser parte de la agenda, manifestando que no solamente son sus aportes tributarios y prácticas laborales las que harán una contribución al posconflicto, sino que también hay importantes iniciativas en derechos humanos, diálogo y relacionamiento con sociedades que pueden aportar a la construcción de paz luego de la firma de los acuerdos con las FARC ⁴⁹. Desde luego, hacer un trabajo completo de reintegración será una de las prioridades del Gobierno en los meses posteriores a la firma de los acuerdos y se espera que el sector privado participe de estas iniciativas. A pesar de esto, desde que el General ret. Oscar Naranjo renunció al cargo de Ministro para el Posconflicto en Junio de 2015 (el exdirector de la Policía Nacional, y será participe de la ejecución de algunos de los acuerdos que se lleven a cabo con la guerrilla de las Farc en los diálogos de paz) no se ha nombrado un remplazo para este importante cargo ⁵⁰.

Agencia Colombiana para la Reintegración

Sobre el tema de reintegración, el Gobierno tiene amplia experiencia desde 1989, cuando se dio la desmovilización del M-19. A partir del 2003 hubo una reflexión profunda sobre la necesidad de incluir atención psicosocial, inserción laboral, educación y proyectos productivos

⁴⁷ Entrevista del Autor, alto funcionario del Gobierno, Bogotá, 3 de Julio de 2015.

⁴⁸ Entrevista del Autor, Funcionario embajada extranjera, Bogotá 23 de Julio de 2015.

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ "General Naranjo presenta renuncia a cargo de ministro para el Posconflicto". Noticias RCN. 17 de Junio de 2015. Disponible en <http://www.noticiascn.com/nacional-dialogos-paz/general-naranjo-presenta-renuncia-cargo-ministro-el-posconflicto>

para facilitar los procesos de transición de los excombatientes ⁵¹. La Agencia Colombiana para la Reintegración (ACR) tiene una preparación muy clara frente al posconflicto, ya que desde el 2006 hasta febrero de 2015 se han desmovilizado en Colombia más de 57 mil combatientes, 25 mil de forma individual y 32 mil de ellos de forma colectiva ⁵². Teniendo en cuenta que más del 70 % de los desmovilizados están en edad económicamente activa (de 26 a 40 años), debe haber programas especiales para no desaprovechar la contribución económica que ellos puedan hacer al país y al mismo tiempo prevenir que reincidan en su actividad delictiva ⁵³.

Por más de 10 años la ACR ha hecho alianzas público-privadas para proveer empleo a los desmovilizados, pero este es el último eslabón del proceso de reintegración. Además de proveer empleo hay otras facetas que pueden realizar los empresarios para contribuir con la reintegración de excombatientes, como lo puede ser proveer oportunidades de voluntariado y servicio social, el desarrollo de proyectos comunitarios con énfasis en la reconciliación y generar oportunidades de entrenamiento y formación para emprendedores ⁵⁴. Con el sector petrolero la ACR ha tenido acercamientos y ha encontrado disposición de participar en las iniciativas, sin embargo, a la fecha no hay convenios puntuales a los que se puedan referir, aunque sí menciona que se busca trabajar no solamente con el sector petrolero, sino con todos los sectores. Adicional a esto, la reintegración de excombatientes no solamente es tarea de las empresas y el gobierno, sino un esfuerzo de la sociedad como tal para comenzar a recuperar el tejido social que ha sufrido importantes fracturas a lo largo de los 60 años de guerra por los cual ha pasado el país. A pesar de que este trabajo requiere dinero y esfuerzo por parte de las empresas, el Estado no ofrece beneficios tributarios para aquellas que reciban reinsertados o incorporen laboralmente a los reinsertados ⁵⁵.

Estrategia Territorial de Hidrocarburos

Más allá del tema de la reinsertación, el Gobierno Nacional, mediante el Ministerio de Minas y Energías (MinMinas), la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH) y el Ministerio del Interior (MinInterior) desarrollaron la Estrategia Territorial para la Gestión Equitativa y Sostenible del Sector Hidrocarburos (ETH), que cuenta con el apoyo del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) y tiene como principal objetivo promover las visiones participativas del desarrollo humano sostenible, como instrumento para la construcción de paz territorial.

Esta estrategia consiste en cuatro pilares:

- 1) **Convive** – Atención y prevención de conflictividad. Busca identificar las expresiones de la comunidad y ayuda a detectar los riesgos antes de que estos ocurran. Para esto también el Plan Nacional de Desarrollo en su artículo No. 124 (en viñeta) desarrolló un sistema de prevención y gestión de conflictos.
- 2) **Avanza** – Una iniciativa de diálogo entre la comunidad y la empresa para dar solución a las conflictividades existentes. No reemplaza la consulta previa, pero sirve como espacio para articular visiones de desarrollo territorial.

⁵¹ Entrevista del Autor, funcionaria de la Agencia Colombiana para la Reintegración, Bogotá, 5 de Agosto de 2015.

⁵² *Ibid.*

⁵³ *Ibid.*

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ *Ibid.*

- 3) **Lidera** – Fortalecimiento de actores para que haya más información entre las partes en las etapas previas a los emprendimientos por parte de las empresas petroleras. Es un complemento al relacionamiento de las empresas con las comunidades para cerciorarse que el Gobierno acompañe el proceso de establecer expectativas con las comunidades.
- 4) **Acciones demostrativas** – son inversiones de las empresas que pueden ayudar a generar un clima de cooperación entre las empresas y las comunidades mediante el diálogo y objetivos de desarrollo similares (El Anexo F de los contratos de exploración de hidrocarburos especifica que todas las inversiones sociales voluntarias y los Programas de Beneficio para las Comunidades deben ser sincronizados con los planes de desarrollo municipales que, a su vez, tienen que estar articulados dentro de los planes de desarrollo departamentales y estos tienen que encajar dentro del Plan Nacional de Desarrollo).

Artículo No. 124: Sistema Integral de Prevención y Gestión de Conflictos. El Gobierno Nacional creará y pondrá en funcionamiento el Sistema Integral de Prevención y Gestión de Conflictos, orientado a generar alertas tempranas que permitan, en ejercicio del diálogo democrático, evitar conflictos sociales, económicos y ambientales. El sistema deberá estar articulado con los demás sistemas u observatorios existentes en el sector público, así como con las entidades territoriales, las cuales deberán estructurar de manera armónica y compatible sus sistemas de información, dentro del año siguiente a la promulgación de la presente ley.

Sobre lo anterior, es destacable que existan alertas tempranas, pero como menciona Miguel Ángel Balcárcel, asesor presidencial a cargo del Sistema Nacional de Diálogo de Guatemala, “no se necesitan alertas tempranas sino respuestas tempranas”⁵⁶. El Gobierno no solamente debe hacer presencia para evaluar y analizar lo que está sucediendo, sino para responder y emprender acciones correctivas de manera eficaz, que es lo que buscan hacer los demás pilares de la ETH, un esfuerzo que ha sido desempeñado por estas agencias gubernamentales desde el 2013.

Como parte del trabajo del MinInterior se ha creado una Mesa de Alistamiento para la Paz, presidida por el Viceministerio para desarrollar proyectos acerca del Punto de Participación Política de las FARC (segundo punto del acuerdo con la guerrilla) y fortalecer los escenarios de diálogo entre el Gobierno, la industria y la comunidad para alcanzar la paz en los territorios⁵⁷. Las nuevas iniciativas de diálogo del Gobierno son muy importantes, sin embargo, como lo menciona Ana Carolina Gonzales, profesora de la Universidad Externado, “el diálogo no sustituye la regulación, ni el relacionamiento comunitario de las empresas y tampoco el control ciudadano”⁵⁸. Es esencial que el diálogo sea acompañado por acciones que mejoren el contexto de la actual política minero-energética. Parte de la tarea, como menciona el exviceministro del Interior, Juan Fernando Londoño, es demostrar la legitimidad social del

⁵⁶ Ormachea, I. Asesor presidencial a cargo del sistema nacional de diálogo de Guatemala. Hablando en el Diálogo sobre políticas e industrias extractivas, prevención de conflictos y diálogo democrático, Bogotá, 13 de Agosto de 2015.

⁵⁷ Ferro, Carlos. Viceministro del Interior. Hablando en Diálogo *op. cit.*, Bogotá, 12 de Agosto de 2015.

⁵⁸ Gonzalez, Ana Carolina. Docente, Universidad Externado de Colombia. Hablando en el Diálogo *op. cit.*, Bogotá, 12 de Agosto de 2015.

sector de los hidrocarburos para que las entidades nacionales y locales de control dejen de tener que atender problemas urgentes y enfocarse así en lo estructural ⁵⁹.

Ministerio de Defensa

El Ministerio de Defensa Nacional también está preparándose para los cambios que puedan darse posterior a la firma de los acuerdos con las FARC, pero su misión actual es combatir a los actores armados ilegales y proteger a la población civil y la infraestructura del país contra ataques de estos grupos. Para este último propósito, en el 2003 se formaron los Batallones Especiales Energéticos y Viales (BAEEV), cuya misión ha sido contribuir a la seguridad de la actividad petrolera en el área de operaciones de las compañías, incluidas las zonas de exploración, explotación y transporte. Con el propósito de mejorar la comunicación entre las fuerzas de seguridad pública, las instituciones estatales y el sector privado, en el 2014, el Gobierno creó el Centro de Operaciones Especiales para la Protección de la Infraestructura Crítica y Económica del Estado (COPEI).

Para apoyar este trabajo, las compañías petroleras y las Fuerzas Militares han llegado a una serie de convenios o “Acuerdos de Protección Militar” entre las compañías y el Ministerio de Defensa, “mediante los cuales se dedican unidades de las Fuerzas Armadas a la exclusiva tarea de seguridad de las operaciones de la empresa” y la infraestructura⁶⁰. En el país actualmente hay 10 COPEI y 16 BAEEVs de hidrocarburos, que están prestos a vigilar la infraestructura de hidrocarburos del país. Sin embargo, la tarea es titánica considerando la expansión geográfica del país y el desplazamiento de la tropa. Según una persona con profundo conocimiento de los contextos de seguridad, las BAEEVs han hecho un trabajo interesante de coordinación entre las distintas partes, “pero el problema es que han dado soluciones a problemas coyunturales y no los problemas estructurales de seguridad que derivan de problemas sociales más profundos y también un débil sistema judicial que no castiga a los malhechores”⁶¹.

Teniendo en cuenta que durante el rompimiento de la tregua uno de los blancos predilectos de las FARC y el ELN fue la infraestructura petrolera, ante cualquier situación de posconflicto, un funcionario del Ministerio de Defensa manifestó que “los convenios con las empresas se mantendrán en cualquier circunstancia, firmado el acuerdo o sin firmar el acuerdo, porque las empresas van a operar en muchos territorios de cualquier manera”⁶². A pesar que las FARC siguen emprendiendo acciones contra la infraestructura energética, estas no son una muestra de capacidad estratégica por parte de los insurgentes, ya que para atacar la infraestructura no es necesario un gran pie de fuerza, sino un golpe de oportunidad. Lo cierto es que esta clase de ataques sí tiene un gran efecto en limitar la movilidad de la tropa, ya que luego de un atentado se tiene que volcar a proteger toda la infraestructura petrolera limitando su despliegue ofensivo. Incluso estima un funcionario del Ministerio de Defensa que alrededor del 75 % de la fuerza tiene que defender la infraestructura para mantener las condiciones económicas del país⁶³. Según analistas y funcionarios de Gobierno, no se plantea que el pie de fuerza deje de cuidar la infraestructura petrolera ante la firma del acuerdo de paz⁶⁴.

⁵⁹ Londoño, Juan Fernando. Ex-Viceministro del Interior. Hablando en el Diálogo *op. cit.*, Bogotá, 12 de Agosto de 2015.

⁶⁰ Gonzáles Posso, Camilo. Petróleo y transformación de conflictos. Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (INDEPAZ) Bogotá, 2011. p. 37.

⁶¹ Entrevista del Autor, gerente social de compañía petrolera, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

⁶² Entrevista del Autor, funcionario del ministerio de defensa, Bogotá 24 de Julio de 2015.

⁶³ *Ibid.*

⁶⁴ *Ibid.*

Comunicación

Al iniciar las conversaciones de paz en La Habana, el Gobierno dijo que “nada está acordado hasta que todo esté acordado.” Este mantra de negociación es útil para mantener un clima de confianza en la mesa y evitar exabruptos por puntos particulares. La mayoría de las personas entrevistadas concuerdan en que la estrategia del Gobierno de mantener una reserva absoluta de lo que se está negociando actualmente siembra incertidumbre entre la sociedad y también entre las empresas mismas. Algunos analistas incluso llaman a la falta de comunicación del Gobierno una “cortina de humo” porque aseguran que no hay suficiente dinero para financiar el posconflicto y menos en un entorno de precios petroleros bajos y costos altos ⁶⁵.

Para poder pensar en la factibilidad del posconflicto se debe analizar el tema de planificación a fondo. Al respecto de este tema, Juan David Gutiérrez, estudiante de Doctorado de la Universidad de Oxford, adelanta una investigación para analizar el proceso de toma de decisiones sobre las regalías. También tiene un documento que analiza el uso de la renta de los recursos para financiar el posconflicto en Colombia ⁶⁶. Concluye que “el Gobierno colombiano no ha dado a conocer un plan definitivo para financiar las necesidades de un escenario de posconflicto, pero se ha dado a entender que las rentas de los recursos generados por el sector extractivo pueden ser una importante fuente de financiación” ⁶⁷.

Ha habido algunos acercamientos del Estado con la industria de los hidrocarburos. Por ejemplo, el líder negociador del Gobierno, Humberto de la Calle, sostuvo una reunión privada con los miembros del CME para explicarles los avances del proceso y cómo pueden afectarles los tres puntos que hasta hoy han sido acordados en la mesa (1. Acceso y Uso de la Tierra, 2. Participación Política, 3. Solución al Problema de las Drogas Ilícitas). A pesar de resaltar el valor de esta reunión, al contrastarlo con el sentimiento nacional de pesimismo frente a las negociaciones la incertidumbre es entendible. Según los resultados de la encuesta Colombia Opina de julio de 2015, contratada por la Gran Alianza de Medios (RCN La Radio, RCN Tv, la F.m. y la revista Semana), el 69 % de los colombianos creen que los diálogos no culminarán con un acuerdo de paz. Sólo el 29 % cree que las conversaciones con el grupo guerrillero llegarán a feliz término ⁶⁸.

Desde el Gobierno, sin embargo, hay un optimismo que la empresa privada acoja las iniciativas de paz y puedan jugar un papel importante en el posconflicto. Menciona una funcionaria de la Presidencia que “hay muchas empresas que se han acercado al Gobierno a preguntar cómo pueden colaborar para el posconflicto”. No obstante, al sondear sobre las empresas que han tomado este paso, son también aquellas donde el Estado se ubica como uno de sus mayores accionistas como Ecopetrol, Isagén, y Empresas Públicas de Medellín ⁶⁹.

⁶⁵ Entrevista del Autor, analista de seguridad, Bogotá, 26 de Junio de 2015.

⁶⁶ Para leer el documento de Juan David Gutierrez, “*Investing for peace? On the use of resource revenues to finance an eventual post-conflict process in Colombia*” disponible en: <http://revistas.utadeo.edu.co/index.php/RAI/article/view/1033/1067>

⁶⁷ Gutierrez, Juan David, “*Investing for peace? On the use of resource revenues to finance an eventual post-conflict process in Colombia*” p. 1.

⁶⁸ ‘Ultima Encuesta’ Radio Santafe. 31 de Julio de 2015. Disponible en: <http://www.radiosantafe.com/2015/07/31/ultima-encuesta-crece-el-pesimismo-de-los-colombianos-frente-al-proceso-de-paz-y-sobre-la-situacion-economica/>

⁶⁹ Entrevista del Autor, alto funcionario del Gobierno, Bogotá, 1 de Julio de 2015.

Preparación empresarial para el posconflicto

En septiembre de 2014, un grupo de 120 grandes empresas del país, bajo el liderazgo de La Asociación Nacional de Industriales, dio marcha a una iniciativa llamada “Soy Capaz” cuyo principal objetivo era contribuir a la reconciliación de la sociedad y dar a conocer al país que ellas eran capaces de generar cambios en la mentalidad de los colombianos y así acercarlos a la paz. Empresas de gran reconocimiento nacional como Avianca, Coca-Cola, Arturo Calle, Bavaria, Postobón, RCN, Caracol y El Tiempo manifestaron en su momento su apoyo a esta iniciativa.

Un año después, el menguante apoyo al proceso de paz por parte de la sociedad deja entrever un ambiente de incertidumbre en donde el sector privado y, en particular, el sector petrolero son reacios a mostrar su posición sobre el proceso de paz y hablar de sus preparaciones, en caso de tenerlas, hacia el posconflicto. Un escenario donde la empresa privada ha comenzado a aportar al mejoramiento de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario está siendo liderado por la Fundación Ideas para la Paz mediante una iniciativa multi-actor llamada Guías Colombia. En este proyecto participan las empresas del sector no extractivo, las cuales han encontrado espacios comunes de interacción para discutir temas como la seguridad, los lineamientos en quejas y reclamos, las prácticas laborales y la compra y adquisición de derechos sobre la tierra y el derecho de uso. Abrir estos espacios no ha sido fácil, según una funcionaria de la Fundación Ideas para la Paz, por la desconfianza que había entre los actores y por los discursos que manejaban, que eran totalmente opuestos frente a sus percepciones de conflicto ⁷⁰. Es positivo, no obstante, que sectores tan apartados han logrado acuerdos en temas concretos. Al mismo tiempo, poder “hacer de este momento una verdadera oportunidad pasa por reconocer que una paz sostenible requiere apuestas creativas y ambiciosas. Para contribuir efectivamente, las empresas deben fortalecer lo que vienen haciendo, y seguramente sumar nuevos frentes de acción; pero sobre todo deben aproximarse a la paz de manera innovadora y audaz” ⁷¹.

Según varios analistas de la industria, especializados en el tema de seguridad, las petroleras no tienen planes específicos sobre su aproximación al posconflicto, aunque por el contexto de las zonas donde trabajan habrá un papel a jugar. La preocupación principal concierne la actual coyuntura petrolera y si en un eventual posconflicto serán objeto de mayores impuestos u obligaciones contractuales y si esto puede perjudicar su viabilidad financiera, que se encuentra afectada por los bajos precios del crudo ⁷².

Respecto a las negociaciones con las FARC, la industria petrolera debería tener en cuenta dos grandes cosas:

- 1) El Gobierno ha mencionado de muchas formas que no está negociando en La Habana la política económica del país,
- 2) Habrá que examinar con mucho cuidado cómo el acuerdo sobre el primer punto, donde se habla de las Zonas de Reserva Campesina, puede afectar o no la actividad minero-energética.

Según un observador y analista de la industria, “el gran temor de las petroleras, a lo que algunos en el sector se refirieron a la ‘pesadilla Uribista’, es que el Gobierno sí esté discutiendo los pormenores del modelo económico en La Habana” ⁷³. Este temor obedece a la falta de

⁷⁰ Entrevista del Autor, funcionaria Fundación Ideas para la Paz, skype, 31 de Agosto de 2015.

⁷¹ “El sector empresarial debe ir más allá.” Fundación Ideas para la Paz. 22 de Abril del 2015. Disponible en: <http://www.ideaspaz.org/publications/posts/1161>

⁷² Entrevista del Autor, periodista y analista petrolero, Bogotá, 24 de Junio de 2015.

⁷³ Entrevista del Autor, periodista y analista petrolero, Bogotá, 25 de Junio de 2015.

comunicación que ha tenido el Gobierno acerca de lo que ocurre en La Habana y su impacto en el país.

No todas las petroleras enfrentan los mismos desafíos, ya que algunas operan en áreas con mayor o menor conflictividad y esto también afecta su posición frente a los acuerdos. Según un reconocido periodista y analista de la industria petrolera, “Existen zonas del país que ya pueden considerarse en posconflicto donde operan algunas petroleras, sin embargo hay algunos lugares como Putumayo, Norte de Santander y Caquetá donde el conflicto persiste”⁷⁴. Una preocupación constante de las empresas del sector es el panorama de seguridad, pues hay una constante amenaza de algunos grupos extorsivos que buscan sacar provecho de la presencia empresarial y también en algunas zonas del país, principalmente en los departamentos de Arauca, Norte de Santander y Putumayo⁷⁵. Hay una sensación de alarma entre algunas petroleras porque si el conflicto llega a terminar, las petroleras tendrían que justificar que el Estado esté cuidando su infraestructura⁷⁶. Además, un componente complicado puede ser que dentro de la misma empresa aquellas personas que manejan el tema de seguridad sobredimensionen los riesgos para evitar que la empresa corte sus presupuestos, los cuales en un contexto de mayor seguridad seguramente se verán reducidos⁷⁷.

En cuanto al diseño de estrategias específicas para el posconflicto, uno de los órganos principales que pueden dar forma al pensamiento del sector al respecto de estas actividades es la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP). No obstante, como lo mencionó una funcionaria de este gremio, “en este momento estamos trabajando en el tema pero aún no existe una posición consensuada entre las empresas al respecto, y adicionalmente es un trabajo que hasta ahora estamos iniciando”⁷⁸.

La falta de planes específicos del sector hacia el posconflicto está ligado al planteamiento del Gobierno nacional de que “nada está negociado hasta que todo esté negociado” y, por ende, las petroleras no se ven en la necesidad de desarrollar planes hasta conocer la totalidad de los acuerdos. Sin embargo, desde el mismo sector se comienza a sentir la necesidad de explorar los acuerdos a los que ya se ha llegado con las FARC para ver cómo los afecta. Y como menciona un funcionario de una compañía prestadora de servicios, “si no se firma el proceso de paz en La Habana, puede haber más problemas de orden público que desde luego serían más costosos para la industria”⁷⁹.

Hay expectativa sobre las iniciativas gubernamentales que puedan surgir como parte del paquete del posconflicto y algunas empresas cuentan con que el Gobierno sea sensible a la situación por la cual está pasando el precio del petróleo y esté dispuesto a reducir impuestos y ofrecer incentivos para que las petroleras participen en las iniciativas de posconflicto⁸⁰. Abrir plazas laborales para desmovilizados o excombatientes no sería una prioridad para las petroleras, puesto que actualmente están intentando cortar gastos y eliminar pozos menos eficientes de sus operaciones, lo que además puede complicar también sus relaciones con las Juntas de Acción Comunal (JAC) con quienes existen acuerdos y compromisos de contratación

⁷⁴ *Ibid.*

⁷⁵ Ataques a la Infraestructura Petrolera. Ágora Consultores. Abril de 2015. Disponible en <http://goo.gl/fL4YRC>

⁷⁶ Entrevista del Autor, consultor y entrenador sector petrolero, Bogotá, 26 de Junio de 2015.

⁷⁷ Entrevista del Autor, analista de seguridad y entorno político, Bogotá, 3 de Julio de 2015.

⁷⁸ Correspondencia con el Autor, funcionario de la Asociación Colombiana de Petróleo (ACP), Bogotá, 22 de Junio de 2015.

⁷⁹ Entrevista del Autor, funcionario compañía de servicios petroleros, Bogotá, 22 de Julio 2015.

⁸⁰ *Ibid.*

local⁸¹. Los acuerdos o compromisos que realicen las empresas del sector con las JAC para efectos de contratación local, se constituyen en una modalidad ilegal de intermediación laboral, reglamentada por el Ministerio de Trabajo⁸².

Según el gerente social de una compañía petrolera, la preocupación de las empresas sobre el posconflicto es conocer cuáles serán sus responsabilidades y el Gobierno no ha dado claros lineamientos sobre sus planes. Si el precio del petróleo continúa bajando y el Gobierno sube impuestos entonces no habrá otra opción para las empresas que obedecer a sus asesores financieros y cerrar operaciones⁸³. Para él, las empresas quisieran saber con anticipación y con tiempo cuáles son los preparativos que se espera de ellas para poder hacer proyecciones financieras⁸⁴.

En el tema que las empresas petroleras si han progresado es en el de Derechos Humanos y Empresa, el cual ha sido impulsado por el CME y la Alta Consejería para los Derechos Humanos de la Presidencia de la República. En el CME se ha logrado establecer principios rectores de derechos humanos a los que las empresas se han acogido de manera voluntaria. Los han incorporado porque saben que el poder de mercado va a tener un gran impacto en sus iniciativas de responsabilidad social empresarial⁸⁵.

Un buen ejemplo de como las empresas petroleras están realizando esfuerzos para incluir los principios rectores de DDHH en sus actividades es un proyecto piloto que están actualmente realizando Ecopetrol y la Unión Sindical Obrera en Barrancabermeja, el cual es un ejemplo de revivir la memoria histórica y de diálogo y construcción de paz entre partes distintas. Al principio hubo escépticos en la empresa y el sindicato sobre el alcance de este proyecto, pues en ambos bandos había desconfianza, menciona una funcionaria responsable de memoria histórica en el Magdalena Medio⁸⁶. Según Todd Howland, funcionario de la ONU, “hay pocos ejemplos mundiales en esta clase de colaboración en el tema de memoria histórica y este puede ser considerado un ejemplo piloto para el mundo”⁸⁷. Se busca que las víctimas, los miembros de la USO y los funcionarios de Ecopetrol utilicen el espacio del Centro de Memoria Histórica, el cual están construyendo en Barrancabermeja y estará listo en el 2018, como un espacio de construcción de paz⁸⁸. Los proyectos como el de Ecopetrol y la USO puede que no saquen a colación toda la verdad que las distintas partes quieren de una forma rápida, pero sí ayuda a generar lazos de confianza, ya que hablar de verdad es difícil y doloroso para todas las partes⁸⁹.

Conversaciones con el ELN

Como se ha mencionado anteriormente, si para las FARC el tema petrolero es tangencial a su gran prioridad de reordenamiento rural del país, para el ELN el tema petrolero y de extracción de recursos naturales ha sido un fundamento de su lucha armada. Es por esto que, como lo mencionó un observador, “es muy difícil creer que las compañías no han hecho un lobby informal sobre lo que se está hablando con el ELN, pero se sabe que existen límites

⁸¹ Entrevista del Autor, periodista y analista petrolero, Bogotá, 24 de Junio de 2015.

⁸² Entrevista del Autor, Funcionario del Ministerio de Trabajo, Bogotá 13 de Julio de 2015.

⁸³ Entrevista del Autor, gerente social de compañía petrolera, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

⁸⁴ *Ibid.*

⁸⁵ Chávez, Diana. Directora del Centro Regional para América Latina y el Caribe de Pacto Global. Hablando en el Dialogo *op. cit.*, Bogotá, 12 de Agosto de 2015.

⁸⁶ Entrevista del Autor, funcionario de proyecto de verdad y memoria histórica, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

⁸⁷ Video Ecopetrol sobre Memoria Histórica.

⁸⁸ Entrevista del Autor, Funcionarios de Compañía Petrolera, Bogotá, 30 de Junio de 2015.

⁸⁹ Entrevista del Autor, funcionario de proyecto de verdad y memoria histórica, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

en la negociación con el ELN porque, como con las FARC, el Gobierno no está dispuesto a discutir el tema económico en la mesa de negociación”⁹⁰. Un funcionario de una compañía de servicios petroleras califica de preocupante el panorama actual de las negociaciones con el ELN porque Arauca es uno de los municipios de producción petrolera más importante y allá, “todas las petroleras tienen problemas con el ELN”⁹¹.

No deja de ser sorprendente que *ad portas* de iniciar diálogos con el ELN ninguna de las petroleras consultadas por el autor hayan manifestado una posición sobre estos diálogos ni la posibilidad de que estos afecten su actividad. Como lo mencionó un gerente social de una empresa petrolera, las condiciones contractuales no deben ser sujetos de las negociaciones con el ELN puesto que las negociaciones se han hecho con el Estado.⁹²

Preparación de comunidades para el posconflicto

Al contrario de las empresas petroleras, quienes si tienen ánimo de planificar un escenario de posconflicto son algunas comunidades locales quienes serían las grandes beneficiarias de un acuerdo de paz. Manifiestan algunos líderes comunitarios en sus pliegos de peticiones que quisieran tener un protagonismo superior en el diseño e implementación de las políticas minero-energéticas en el territorio. Por ejemplo, un sacerdote católico que tiene amplio bagaje sobre los temas de violencia y paz sostiene que debe haber un replanteamiento del modelo de negocios petrolero y convertirse en más distributivo y equitativo en la repartición de la riqueza generada del subsuelo “para tener una relación gana-gana, donde las compañías logren recuperar la confianza del entorno, disminuyendo así los costos de seguridad y creando un clima de cooperación en vez de perpetuar el de desconfianza y explotación”⁹³.

Algunas comunidades ven como en el marco de la ETH y las negociaciones en La Habana hay mayor participación ciudadana, pero algunos de los líderes comunitarios consultados consideran clave que el diálogo social entre el Gobierno y las comunidades sea fluido y no dependa únicamente del proceso de paz o de los bloqueos que hagan las comunidades⁹⁴. Las comunidades consideran positivo que las FARC quieran hacer un partido político y lancen propuestas, sin embargo, hay un temor de que las manifestaciones y peticiones del movimiento social sean cooptadas por el movimiento político de las FARC y puedan perder espacios de interlocución que consideran haber ganado a pulso⁹⁵.

Un experimento está actualmente sucediendo en la ciudad de Barrancabermeja, donde desde el 2010 se han reunido todos los grupos de interés de la ciudad, incluido Ecopetrol, la Unión Sindical Obrera, la Diócesis de Barrancabermeja, la Alcaldía de la ciudad, el Consejo de la Ciudad, el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, la Gobernación de Santander y la Cámara de Comercio de Barrancabermeja. Este esfuerzo se llama el Gran Acuerdo Social del Magdalena Medio y tuvo como principal impulsor el Proyecto de Modernización de la Refinería de Cartagena, que ahora ha sido pospuesto por el Gobierno⁹⁶. No obstante, este Gran Acuerdo permanece en pie buscando soluciones conjuntas a los temas que interesan al desarrollo de la ciudad. Los temas que están trabajando actualmente son:

⁹⁰ Entrevista del Autor, analista de seguridad y entorno político, Bogotá, 3 de Julio de 2015.

⁹¹ Entrevista del Autor, funcionario compañía de servicios petroleros, Bogotá, 22 de Julio 2015.

⁹² Entrevista del Autor, funcionario de compañía petrolera, Bogotá, 13 de Agosto de 2015.

⁹³ Entrevista del Autor, Sacerdote y activista por la paz, Bogotá, 13 de Junio de 2015.

⁹⁴ Entrevista del autor, investigador y líder social de Barrancabermeja, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

⁹⁵ Entrevista del Autor, investigador y director de centro de pensamiento, Barrancabermeja, 28 de Julio de 2015.

⁹⁶ *Ibid.*

1. Desarrollo y Talento Humano
2. Cultura Ciudadana
3. Familia como eje de desarrollo
4. Desarrollo Económico
5. Infraestructura
6. Fortalecimiento institucional.

Bajo el liderazgo de la Universidad Javeriana se le dio cuerpo a este Gran Acuerdo Social, el cual ahora reposa en el Centro de Estudios Regionales de Barrancabermeja y busca así articular las prioridades a largo plazo, y no de contexto, para que la ciudad tenga una visión de desarrollo territorial que haya sido concertada y desarrollada por sus múltiples grupos de interés. Como parte de estos esfuerzos han construido modelos de estrategias que pueden ser utilizados por mandatarios locales para replicar el programa Gran Acuerdo Social ⁹⁷.

Un aspecto sobre el cual las comunidades manifiestan falta de preparación es en su capacidad de acoger excombatientes y reintegrarlos a la sociedad. En el debate a la Alcaldía de Barrancabermeja, varios candidatos manifestaron no saber cuáles serán las políticas del Gobierno nacional y estar a la expectativa de la ACR para dar inicio a actividades de reintegración ⁹⁸. Para las comunidades hay un estigma muy grande de trabajar con los excombatientes y personas que han sido reintegradas, ya sea porque muchos de los locales han sido víctimas de estos mismos grupos y resienten el hecho de que estas personas reciban beneficios por parte del Estado ⁹⁹.

¿Qué puede ocurrir en materia petrolera en un escenario de posconflicto?

Conflictividad Social

Según un analista internacional, manifestaciones como la que hubo en Valparaíso, Caquetá, en junio de 2015, muestran un destello de lo que puede ocurrir en materia de conflictividad social en un eventual posconflicto ¹⁰⁰. En este municipio fue concesionado en el 2012 un lote petrolero a la empresa Emerald Energy que comenzó trabajos de socialización de los proyectos ¹⁰¹. Los habitantes de la comunidad, liderados por la Comisión por la Vida y el Agua, “aseguran que la intervención de las petroleras sobre el subsuelo ha dañado el ecosistema de la Amazonía y afecta de manera directa la fauna y la flora, por lo cual piden que se reconozca a la naturaleza como una víctima más del conflicto armado” ¹⁰². Con estas protestas, llevadas a las vías de hecho y bloqueos, las comunidades impidieron por más de dos meses que la empresa opere en el lote que le fue concesionado.

Esto es solamente una de las muchas comunidades que recurren a bloqueos que logran detener, así sea temporalmente, la exploración petrolera. Menciona un periodista y analista petrolero que, “los bloqueos y la protesta social pueden verse exacerbados porque las

⁹⁷ Para aprender más sobre la sistematización del Gran Acuerdo Social, pueden visitar la página del acuerdo: <http://granacuerdosocial.com.co/acuerdo/index.php/sala-de-prensa/documentos/book/1-documentos/1-documentos-publicados>

⁹⁸ Palabras Candidatos a la Alcaldía de Barrancabermeja durante Debate Organizado por la Diócesis de Barrancabermeja y el Programa de Desarrollo y Paz del Magdalena Medio, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

⁹⁹ Entrevista del Autor, investigador y director de centro de pensamiento, Barrancabermeja, 28 de Julio de 2015.

¹⁰⁰ Entrevista del Autor, analista internacional de conflicto en Colombia, Bogotá, 13 de Julio de 2015.

¹⁰¹ ¿Por qué no quieren exploración petrolera en Caquetá? *Verdad Abierta*. 15 de Julio de 2015.

Disponible en: <http://www.verdadabierta.com/lucha-por-la-tierra/5869-por-que-no-quieren-exploracion-petrolera-en-caqueta>

¹⁰² *Ibid.*

juntas de acción comunal están ahora mejor organizadas, tienen capacidad no solamente de exigir el cumplimiento de pactos con las petroleras, sino también en algunas ocasiones de lograr que se les otorguen beneficios adicionales a sus directivos. Ahora hay voz y poder de organización junto con una importante capacidad de convocatoria que pueden afectar la actividad petrolera ”¹⁰³. Según un funcionario del PNUD, actualmente existe un problema de confianza entre las comunidades y el sector petrolero porque en muchas instancias las comunidades están exigiendo dentro de sus pliegos de petición presentados en los bloqueos la salida de las empresas y un espacio en la conversación sobre política minero-energética ¹⁰⁴.

Un problema recurrente manifestado es que la comunidad siente poca representación de los partidos políticos o los representantes del Congreso, por esto es que están buscando espacios de participación en la toma de decisiones que, en muchos casos, no obedecen al ordenamiento constitucional, que en algunos de estos territorios nunca ha aplicado ¹⁰⁵. La desconfianza sembrada entre las comunidades y los mandatarios locales, que también es atribuible a que estos, como resultado del nuevo Sistema General de Regalías (SGR), no tienen el control de las inversiones de las regalías, ha hecho que las comunidades protesten buscando interlocución directa con el Gobierno nacional a nivel de Viceministerios y Ministerios y, aunque paradójicamente la intención del Gobierno es descentralizar, termina así centralizando más sus actividades ¹⁰⁶. Esta ilegitimidad no solamente es producto del SGR y de la falta de ejecución del estado central, sino también de la ineptitud en la provisión de bienes y servicios por parte de las ramas locales del legislativo y ejecutivo y la administración de justicia ¹⁰⁷.

Una cuestión de importancia es que el presidente Juan Manuel Santos en varias instancias ha clasificado la “locomotora minero-energética” como uno de los grandes ejes de crecimiento económico para el país y le dio mucho más poder a las comunidades, quienes ahora saben que el Gobierno tiene una sensibilidad especial hacia este sector y que pueden presionar al Gobierno ¹⁰⁸. Desde el campo mismo lo ven así, como lo menciona un académico e investigador local: “los movimientos sociales entienden que las vías de hecho funcionan y dan resultado tanto con los gobiernos regionales y locales como con el Gobierno nacional y juegan en contra de la inmediatez por parte de estos y las empresas para sacar el crudo” ¹⁰⁹. Los movimientos sociales han aprovechado que el Gobierno es partidario del diálogo y debe responder ante las manifestaciones de malestar social. Se han dado manifestaciones sociales por parte de los sectores agrícola, cafetero, de transportadores, de trabajadores de la rama judicial, de maestros, de médicos, las cuales han amenazado con paralizar el país y, desde el 2013, han logrado importantes concesiones del Gobierno.

El ambiente de desconfianza está sembrado y, además, va a ser muy difícil lograr que el Estado y la institucionalidad tengan arraigo en algunos lugares del país donde tradicionalmente han estado ausentes. Como lo menciona un funcionario del Ministerio de Defensa, “hay algunos lugares donde será muy difícil que el Estado establezca relaciones de

¹⁰³ Entrevista del Autor, periodista y analista petrolero, Bogotá, 24 de Junio de 2015.

¹⁰⁴ Entrevista del Autor, Funcionario de PNUD, Bogotá 3 de Julio de 2015.

¹⁰⁵ Entrevista del Autor, investigador y director de centro de pensamiento, Barrancabermeja, 28 de Julio de 2015.

¹⁰⁶ Entrevista del Autor, Alto funcionario de Ministerio de Trabajo, Bogotá, 13 de Julio de 2015.

¹⁰⁷ *Ibid.*

¹⁰⁸ Entrevista del Autor, consultor en seguridad y profesor universitario, Bogotá. 27 de Julio de 2015.

¹⁰⁹ Entrevista del Autor, investigador y director de centro de pensamiento, Barrancabermeja, 28 de Julio de 2015.

confianza con personas que provienen de 2 o 3 generaciones de influencia de las FARC y el ELN” ¹¹⁰.

Las empresas tratan siempre de lidiar con las causas de los bloqueos y encontrar junto con las comunidades salidas para no tener que recurrir a las vías de hecho, pero cuando se arma un bloqueo las empresas tienen que, junto con el Estado, encontrar una forma de responder y mantenerse operando ¹¹¹. Según una activista ambiental, las petroleras hoy se han dado cuenta que no son intocables y las comunidades tienen muchas más ganas de pelear con las petroleras tanto en materia ambiental como en materia social ¹¹². Esto se ha dado porque las comunidades ahora son conscientes de la falsa promesa de la explotación petrolera que asegura desarrollo y porvenir, pero deja atrás pueblos fantasmas a lo largo del país ¹¹³.

Para las comunidades los temas laborales son su principal interés, una vez entran las empresas petroleras a operar todo el mundo quiere trabajar para las empresas, así sea directamente u ofreciendo servicios de distinta índole como alimentación, transporte, hospedaje, servicios de limpieza o trabajo temporal en lo que sea requerido. Es por esto también que uno de los reclamos más recurrentes es la contratación y permanencia de extranjeros en los pozos petroleros o demás actividades del sector, argumentando que hay capacidad en Colombia para realizar esas mismas actividades ¹¹⁴. Hay poca resistencia cuando se trata de colombianos, pero cuando son extranjeros realizando estas actividades inmediatamente hay un conflicto entre la empresa y los trabajadores locales. Esto dificulta la actividad de las petroleras que tienen que satisfacer sus necesidades de contratación para lograr los objetivos del proyecto ¹¹⁵.

La urgencia por sacar el petróleo también deja de lado los debates sobre el uso del suelo y los beneficios medioambientales que genera el petróleo. Por ejemplo, Casanare, un departamento con un déficit de agua, también es uno de los de mayor producción petrolera en el país, la cual usa una gran cantidad de agua para extraer el crudo ¹¹⁶. El agua misma puede comenzar a ser una disputa entre las empresas petroleras y las comunidades ¹¹⁷. Se plantea desde los círculos ambientales que tampoco va a haber una consideración por tener un debate sobre los beneficios medioambientales del petróleo, teniendo en cuenta que Caquetá es uno de los departamentos más deforestados del país, a causa de la siembra de coca. El incremento de la exploración petrolera ahí puede traer muchos problemas de medioambiente que no se discuten a nivel nacional ¹¹⁸. “No se puede sacar a la naturaleza del contexto porque el contexto es la naturaleza” ¹¹⁹.

Según múltiples fuentes después de la desmovilización de los paramilitares hubo un incremento de la conflictividad social, quizás porque durante el apogeo paramilitar la gente tenía miedo de salir a hablar. Fue más común entonces ver a las personas salir a la calle y exigir el cumplimiento de sus necesidades básicas insatisfechas. El auge de la protesta social es

¹¹⁰ Entrevista del Autor, funcionario del ministerio de defensa, Bogotá 24 de Julio de 2015.

¹¹¹ Entrevista del Autor, gerente social de compañía petrolera, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

¹¹² Entrevista del Autor, activista ambiental, Bogotá, 3 de Agosto de 2015.

¹¹³ *Ibid.*

¹¹⁴ Entrevista del Autor, representante territorial ETH, Barrancabermeja, 28 de Julio de 2015. Sierra.

¹¹⁵ *Ibid.*

¹¹⁶ Cozic, Jasmine y Jimenez, Catalina. “Casanare: Entre la abundancia y la escasez.” Junio de 2015.

Disponible en:

http://crudotransparente.com/index.php?option=com_content&view=article&id=76:casanare-entre-la-abundancia-y-la-escasez&catid=8:destacados&Itemid=102

¹¹⁷ Entrevista del Autor, activista ambiental, Bogotá, 3 de Agosto de 2015. [Roa](#)

¹¹⁸ *Ibid.*

¹¹⁹ *Ibid.*

común en los escenarios de posconflicto, inclusive se ve que la violencia también tiende a incrementar luego de que se firman acuerdos de paz. Según Charles T. Call, profesor de Relaciones Internacionales, Paz y Resolución de Conflictos de la American University y experto en temas de justicia y seguridad, “quizás el hallazgo más importante [...] es el surgimiento universal de nuevas formas de violencia luego de la guerra. Cualquier intento serio de transformar los sistemas judiciales y de seguridad deben anticipar y responder a estos desafíos. Las guerras acaban, pero la violencia en la sociedad no termina. Al contrario, el fin de la guerra formal transforma la naturaleza de la violencia en la sociedad. Esta máxima es verdadera sin importar que la guerra acabe al caer un régimen o al día que el cese el fuego entre en efecto” ¹²⁰.

Extorsión y panorama de seguridad para las empresas

Es precisamente el anterior punto el que más preocupa a los empresarios petroleros, que luego de que el conflicto actual termine, la ola de violencia que ha azotado a la industria por tanto tiempo no desaparezca, sino que cambie. En el posconflicto va a haber muchas oportunidades para que actores armados no estatales implementen extorsión a las petroleras, no solamente está el riesgo de que aquellos que pertenecieron a las guerrillas lo hagan, sino que entren a participar nuevos organismos que no tienen una identidad definida, anteriores paramilitares o inclusive células que operan desde las cárceles busquen sacar réditos de la incertidumbre de la industria ¹²¹.

Hay un sentimiento entre los observadores de la situación de seguridad que el fenómeno de las extorsiones al sector petróleo, por no decir al sector minero-energético, se va a mantener ya que la industria en algunas instancias sí le ha pagado a quienes buscan extorsionarla y estos saben que su estrategia funciona en el corto plazo ¹²². Los problemas de extorsión no se darán a nivel empresarial, se darán a un nivel micro, ya sea a contratistas o proveedores de empresas. Estas micro-extorsiones incluyen, por ejemplo, motos robadas, instrumentos de trabajo robados, amenaza de voladuras, secuestros y obligación de contratar a proveedores con lazos con grupos armados o criminales ¹²³. Estas acciones con la idea de que la compañía pague a pequeñas mafias una asignación mensual para no causar daños. Una parte del problema es la precariedad del sistema judicial de castigar a quienes cometen este delito de una manera ejemplar ¹²⁴.

Del mismo modo, en algunas instancias, funcionarios del Ministerio de Trabajo y Funcionarios de las empresas petroleras coinciden en decir que el empoderamiento de las Juntas de Acción Comunal en el posconflicto puede hacer de algunos de ellos actores rentistas que buscan sacar provecho personal de la necesidad de las personas locales de tener trabajo y exigir de ellos un pago por otorgar un certificado de residencia para acceder a las listas de empleo ¹²⁵. Al mismo tiempo, en los pliegos de petición presentados en los bloqueos, comienzan a ver muchas similitudes, no solamente en el contenido sino en la manera como surgen las protestas. En palabras de un funcionario del Ministerio de Defensa es, “como si hubiera actores detrás dando instrucciones a las comunidades” ¹²⁶.

¹²⁰ Call, Charles T. Constructing Justice and Security after War. United States Institute for Peace. 2007 p. 377.

¹²¹ Entrevista del Autor, consultor de seguridad y profesor universitario, Bogotá, 27 de Julio de 2015.

¹²² *Ibid.*

¹²³ Entrevista del Autor, gerente social de compañía petrolera, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

¹²⁴ *Ibid.*

¹²⁵ *Ibid* y Entrevista del Autor, Funcionario del Ministerio de Trabajo, Bogotá 13 de Julio de 2015.

¹²⁶ Entrevista del Autor, funcionario del Ministerio de Defensa, Bogotá 24 de Julio de 2015.

Un intento que ha hecho el Gobierno nacional para disminuir el carácter rentista y extorsivo de algunas Juntas de Acción Comunal hacia sus miembros es establecer el Sistema Público de Empleo, mediante el cual los particulares pueden ver la oferta laboral disponible en sus zonas y las compañías también pueden publicar plazas de empleo disponibles. Sin embargo, este tema es bastante sensible para las comunidades y algunos sindicatos que sienten que los empleos petroleros les corresponden y deben ser negociados directamente con ellos.

Sistema General de Regalías y sus críticas

El SGR implementado en el 2011 ha causado una fricción tremenda entre el Gobierno nacional y los gobiernos locales a lo largo del país, ya que para evitar la corrupción a nivel local, centraliza funciones de la aprobación y el manejo de los dineros públicos producto de las regalías, del mismo modo buscaba una redistribución nacional más equitativa de la riqueza obtenida en el subsuelo, ya que de esta se beneficiaban solamente los municipios y departamentos productores de recursos naturales ¹²⁷. Parte de la problemática del SGR tiene que ver con el hecho de que con la implementación del nuevo sistema, no es tan rentable ser municipio petrolero porque las administraciones municipales no reciben los mismos dineros por concepto de regalías. Esto hace que los intereses de los gobiernos locales no estén necesariamente alineados con los del Gobierno nacional para agilizar la disolución de las manifestaciones sociales y permitir la extracción de crudo, sino más bien están inclinados a posicionarse con sus representados y posibles votantes que manifiestan inconformidades contra el Gobierno nacional y las empresas ¹²⁸.

Menciona un funcionario del Gobierno que la reforma al SGR fue acertada, pero el problema es que aunque se asignan recursos, estos no se gastan porque los departamentos y los municipios no saben gestionar proyectos y, si los saben presentar, no los saben administrar correctamente. Esto se da porque la reforma fue hecha de forma apresurada y sin acompañamiento ¹²⁹. Concuere con este análisis un investigador del campo, quien menciona que la falta de preparación de los alcaldes y entes territoriales augura un ambiente de lentitud en la gestión de los recursos, que son necesitados de forma urgente: “Los municipios no están preparados para hacer proyectos y los territorios no están capacitados para realizar esas funciones” ¹³⁰. Aquí hay un papel muy importante que deberían jugar el Estado central, pero también debería ser un papel para la academia, de incorporar esta clase de actividades en la formación que dan a sus alumnos para que sepan gestionar proyectos utilizando el SGR, ya que muchos de sus egresados pueden llegar a hacer política en algún momento ¹³¹.

El objetivo del SGR fue centralizar la toma de decisiones sobre el gasto de regalías, lo cual requiere un mayor nivel de diligencia y compromiso de los entes territoriales para dar seguimiento a la aprobación de los proyectos y, en algunos casos, inclusive hacer lobby para que estos salgan. Para esto se requieren alcaldes y gobernadores que tengan iniciativa y que estén empoderados. No obstante, como lo manifiesta la actual situación electoral, una vez

¹²⁷ Para más información sobre el SGR pueden leer el informe especial de Regalías de Crudo Transparente en

http://crudotransparente.com/index.php?option=com_content&view=article&id=102:informe-especial-regalias&catid=8:destacados&Itemid=106

¹²⁸ Entrevista del Autor, funcionario del PNUD, Bogotá, 3 de Julio del 2015.

¹²⁹ Entrevista del Autor, alto funcionario del Ministerio de Trabajo, Bogotá, 13 de Julio de 2015.

¹³⁰ Entrevista del Autor, investigador y director de centro de pensamiento, Barrancabermeja, 28 de Julio de 2015.

¹³¹ *Ibid.*

cambien los mandatarios locales nuevamente se va a tener que capacitar a todos en el funcionamiento del SGR perdiendo un valioso tiempo de implementación.

Los retos de las empresas ante la Comisión de la Verdad

Las empresas petroleras han participado en el conflicto colombiano por acción u omisión y por esto tienen unos pasivos muy grandes con la comunidad que no han sido reconocidos y esto trae malestar, rabia e indignación¹³². Para que la industria petrolera pueda hacer parte efectiva del posconflicto va a tener que hacer un acto de contrición sobre sus aportes al conflicto colombiano. Estos aportes se encuentran en estrados judiciales y son muy numerosos para que este documento los incluya, pero es importante mencionar que estos han sido abundantes y han sido repartidos entre actores. Hay que aclarar que no siempre son aportes voluntarios que han hecho las compañías que responden a los métodos de extorsión y secuestro que ejercieron los actores armados al margen de la ley. A continuación algunos ejemplos:

- En Arauca, el ELN adoptó una estrategia de captación de por medio de extorsiones a las petroleras para financiar sus proyectos armados en la región. El frente Domingo Laín fue el principal beneficiario de estas actividades. Este frente tuvo su premio gordo durante la construcción del oleoducto Caño Limón-Coveñas, que la empresa alemana Mannesmann, junto con la empresa italo-argentina Sicim realizaron. “Entre 1983 y 1985, el ELN presionó a la Mannesmann bajo la amenaza de atentar contra el proyecto y su personal para forzarla a pagar millonarias extorsiones. Aunque nunca se han conocido con certeza los montos que el ELN recibió de la Manessmann, los cálculos indican que por la liberación de cuatro de sus ingenieros, la empresa habría pagado hasta 8 millones de dólares, de los cuales una parte se recibió en efectivo y el resto debían ser invertidos en obras sociales”¹³³.
- Del mismo modo, Sicim, durante la construcción del oleoducto bicentenario, “realizó varios pagos a estructuras de las FARC y el ELN entre 2012 y 2014. Había uno de seis millones de dólares, tres para el ELN y tres para las FARC; y uno de 600 millones de pesos para un comandante del ELN”¹³⁴. Este financiamiento ocurrió pese a las amenazas del presidente Juan Manuel Santos de sacar del país a las empresas que pagaran extorsiones a grupos armados ilegales.
- La Asociación Cravo Norte, de la cual hacían parte Occidental Petroleum, British Petroleum, Ecopetrol y Repsol-YPF, suscribió un acuerdo de colaboración en el que se comprometían a financiar a las unidades de la XVIII Brigada del Ejército. Este acuerdo “incluyó el uso de las instalaciones de la OXY para planear operaciones militares y de recursos humanos que tendrían como función contractual desarrollar labores de vigilancia del oleoducto, pero donde se llegaron a realizar actividades militares”. En diciembre de 1998 el Ejército bombardeó con una bomba de racimo lanzada desde un helicóptero a la vereda Santo Domingo, ubicada en el municipio de Tame, Arauca, donde murieron 17 civiles y quedaron heridos 27. La Corte Interamericana falló en

¹³² Entrevista del Autor, Analista Petrolero, Bogotá, 1 de Julio de 2015.

¹³³ Corporación Nuevo Arco Iris. El Domingo Laín tuvo su propia “locomotora” del petróleo y comete su peor crimen (2da parte). 26 de mayo de 2012. Disponible en: <http://www.arcoiris.com.co/2012/05/el-domingo-lain-tuvo-su-propia-locomotora-delpetroleo-y-comete-su-peor-crimen/> y Fundación Ideas para la Paz. *op.cit.* p. 13.

¹³⁴ “La petrolera que negociaba con el ELN”. *Revista Semana*. 31 de enero de 2015. <http://www.semana.com/nacion/articulo/la-petrolera-que-negociaba-con-el-ELN/416475-3> y Fundación Ideas para la Paz. *op.cit.* p. 18.

contra del Estado colombiano y también responsabilizó a la empresa OXY de prestar apoyo logístico al Ejército ¹³⁵.

- En el 2002, Gilberto Torres Martínez, un dirigente de la Unión Sindical Obrera fue secuestrado y sometido a torturas por paramilitares del Casanare durante más de cuarenta días. Se estableció durante la audiencia del juicio a los autores materiales del crimen que la detención arbitraria y tortura del Sr. Torres fue hecha por solicitud de directivos de Ocesa y Ecopetrol y luego fue revertida por la presión de la Cruz Roja Internacional y diversas ONG que solicitaron que fuera preservada la vida del dirigente sindical ¹³⁶.

Estos y muchos otros casos reposan sobre estrados judiciales en Colombia y ponen de manifiesto la sistematicidad de algunos de los crímenes, al mostrar como han contribuido las empresas a violaciones de derechos humanos, a la criminalización de la protesta social, las restricciones a la libertad de circulación, la vulneración de los derechos de los pueblos indígenas y el deterioro ambiental. La gran mayoría de estas acciones se han desarrollado con impunidad, lo cual ha contribuido de una forma importante a sembrar la desconfianza de la comunidad hacia la industria petrolera.

En junio de 2015, las FARC y el Gobierno nacional anunciaron en la mesa de negociación un acuerdo para establecer una Comisión de la Verdad. Tiene como propósito contribuir y esclarecer lo que ocurrió durante el conflicto, promover y contribuir al reconocimiento de las víctimas y promover la convivencia en los territorios, al hacer un reconocimiento individual y colectivo de las responsabilidades en el conflicto ¹³⁷. En este sentido, para que primen los principios de verdad y no repetición, el sector privado debería participar esclareciendo cuál fue su papel en el conflicto armado y asumir un compromiso de no repetición. La memoria histórica permite reconstruir la línea de vida e historia de las personas para que se ubiquen en un espacio y un tiempo y conozcan cómo sus acciones influyen en el territorio, cómo el territorio influye en el país y cómo el país influye en la vida mundial ¹³⁸.

Entre los empresarios hay escepticismo sobre una Comisión de la Verdad, ya que no ha habido tampoco un gran destape sobre la financiación del paramilitarismo en Colombia, a menos de tratarse de algunos casos emblemáticos, tales como Drummond, Chiquita y Coca-Cola por nombrar algunos. Las empresas en estos casos han argumentado que los pagos fueron hechos en un contexto extorsivo y no tenían otra salida, ya que la debilidad del Estado era tal que las empresas tenían la alternativa de pagar o no operar ¹³⁹.

Según un analista internacional, la Comisión de la Verdad tiene que mirar los actores económicos del conflicto. No se puede evitar el tema de los financiadores, pero es un tema muy sensible. Las organizaciones de derechos humanos y algunos comentaristas de izquierda han abordado la problemática y han demandado ante los entes internacionales demostrar la sistematización de las prácticas y pagos a grupos armados ilegales.

¹³⁵ Corte Interamericana de Derechos Humanos – CIDH. Caso masacre de Santo Domingo vs. Colombia. Sentencia de 30 de noviembre de 2012.

http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_259_esp.pdf

¹³⁶ BP and Ocesa – The oil companies and the assassins. *The Guardian*. 22 de mayo de 2015. Disponible en: <https://www.youtube.com/watch?v=IAyPIZcuCKA>

¹³⁷ “Los tres objetivos que tendrá la Comisión de la Verdad,” *El Tiempo*. 4 de Junio de 2015. Disponible en: <http://www.eltiempo.com/politica/proceso-de-paz/comision-de-la-verdad-en-los-dialogos-de-paz/15891856>

¹³⁸ Entrevista del Autor, funcionario de proyecto de verdad y memoria histórica, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

¹³⁹ Entrevista del Autor, analista de seguridad y entorno político, Bogotá, 3 de Julio de 2015.

El panorama no parece muy prometedor, ya que no es claro cuáles serán las consecuencias judiciales de la verdad, especialmente en el marco de la determinación de los “máximos responsables”. Para una embajada extranjera, “no hay claridad frente a la manera en la que algunos de los crímenes serán juzgados de acuerdo al Tratado de Roma”¹⁴⁰. En la misma comunidad de Derechos Humanos se están preparando para que el proceso no sea el ideal, pero satisfaga las necesidades inmediatas de verdad. Menciona un observador internacional de Derechos Humanos que “en Colombia, justicia total no vamos a obtener, pero debemos hacer presión para conseguir el máximo de justicia que se pueda y que ésta no descalabre el proceso. Es por esto que se tienen que consensuar las actividades que deben tener las empresas en el posconflicto, ya que las empresas tendrán que dar su parte de la verdad que ocurrió durante la violencia en sus tiempos”¹⁴¹.

Para Alexandra Guáqueta, del Ministerio de Posconflicto, “es ventajoso que haya ya un léxico para dirigirse hacia temas de derechos humanos que las empresas conozcan, el cual ha sido socializado por ellos en los acuerdos de empresas y derechos humanos, y ya este diálogo se puede dar con una base más sólida entre todas las partes”¹⁴². Según la funcionaria de la Presidencia, la Comisión de la Verdad va a regir luego de firmados los acuerdos y esta no va a tener consecuencias penales, pero si se revelan violaciones graves al derecho internacional humanitario, por el hecho de que estas no prescriben, si puede haber consecuencias.

En el marco internacional puede que haya límites para verificar como se van a tratar a las empresas internacionales, pero es preocupante que no haya una discusión interna en Colombia sobre cómo se va a tratar a las empresas locales en este sentido¹⁴³. También, como lo menciona la misma analista “es preocupante que las empresas hagan énfasis en el cumplimiento de marcos voluntarios y de sus aportes filantrópicos para excusarse de tener responsabilidades máximas, lo cual es aún más difícil por el incremento de la tercerización de servicios petroleros, los cuales restan responsabilidad a las empresas y sus casas matrices y achacan la responsabilidad judicial y legal a las empresas locales”¹⁴⁴. Para aquellos que trabajan los temas de memoria histórica, los recursos dedicados actualmente al tema no son suficientes dado el trabajo necesario y la magnitud del daño realizado durante un conflicto con 7 millones de víctimas y 50 años de duración¹⁴⁵.

Conclusiones

La industria petrolera es necesaria para el funcionamiento de la economía colombiana, ya que representa una gran parte de las exportaciones y aporta un componente muy importante de financiación para el Estado. Colombia tiene que ser capaz de explotar sus recursos naturales y utilizarlos para que traigan prosperidad a todos sus ciudadanos. Las negociaciones con las FARC y las aproximaciones con el ELN presentan una oportunidad de tener un diálogo profundo y sincero sobre el papel que han jugado estos recursos en el conflicto armado y abrir la posibilidad de implementar un modelo de desarrollo rural integral que permita la utilización eficiente y ambiental de los recursos naturales que sean beneficiosos tanto para las comunidades que viven en las zonas de explotación petrolera como en el resto del país.

¹⁴⁰ Entrevista del Autor, funcionario embajada extranjera, Bogotá, 23 de Julio 2015.

¹⁴¹ Entrevista del Autor, analista internacional de Derechos Humanos, skype, 29 de Julio de 2015.

¹⁴² Guáqueta, Alexandra. Funcionaria del Ministerio de Posconflicto. Hablando en el Dialogo *op. cit.*, Bogotá, 13 de Agosto de 2015.

¹⁴³ *Ibid.*

¹⁴⁴ *Ibid.*

¹⁴⁵ Entrevista del Autor, funcionario de proyecto de verdad y memoria histórica, Barrancabermeja, 29 de Julio de 2015.

Desafortunadamente, esta conversación no se ha dado de cara a la sociedad con opciones de participación ciudadana que permita consensuar políticas de mutuo beneficio. Este documento insta a las partes a que abran un diálogo que permita discutir a fondo los temas de desarrollo rural y a que las empresas preparen planes de posconflicto y los socialicen cuando el momento sea oportuno. De otra manera, habrá terreno fértil para una prolongación del conflicto que cambiará de forma pero se mantendrá en los territorios.

Recomendaciones:

Para el Estado:

1. Convocar a las distintas partes a un diálogo nacional sobre la industria petrolera y sus beneficios. Este diálogo deberá incluir a las compañías petroleras, las compañías prestadoras de servicios petroleros, los financiadores de las petroleras tanto nacionales como internacionales, sus accionistas, las entidades regulatorias del Estado, entidades territoriales, fundaciones y organizaciones de la sociedad civil que estén dedicadas a generar espacios de diálogo y paz, la Iglesia, las organizaciones sindicales y obreras, las organizaciones de desarrollo territorial, las organizaciones nacionales e internacionales de Derechos Humanos y representantes de los partidos políticos.
2. Comunicar de manera clara y pública cómo los acuerdos logrados en La Habana pueden influir en el funcionamiento de la industria petrolera en Colombia, para así eliminar la incertidumbre y los rumores que rodean los diálogos actuales que se llevan a cabo en La Habana.
3. Publicar la agenda de diálogo tentativa con el ELN y permitir la participación activa de la sociedad civil, en particular, de las víctimas del conflicto. Esto también permitirá que las compañías petroleras puedan preparar planes y estrategias para ofrecer propuestas de desarrollo territorial y medidas a adoptar después de concluir los diálogos.
4. Desarrollar mecanismos de comunicación efectiva y preparación para las comunidades que recibirán reinsertados, con el objetivo de generar espacios de reconstrucción de tejido social entre excombatientes y civiles.
5. Agilizar los procesos de toma de decisión sobre proyectos de regalías, hacer entrenamientos sobre los procesos de la SGR a los entes territoriales, especialmente a las administraciones municipales y departamentales electas el 24 de octubre de 2015 para que conozcan los mecanismos de gestión de recursos ante el SGR y puedan utilizarlos eficientemente desde el inicio de sus mandatos el 1 de enero de 2016.
6. Continuar apoyando la Estrategia Territorial de Hidrocarburos, acompañando de manera permanente a las empresas en el territorio y sirviendo como facilitadores del diálogo y la toma de decisiones. Entendiendo que los conflictos sociales no deben ser solamente arreglados por personas con bagaje técnico, sino deben ser mediados por personas que tengan conocimiento político local y sepan cuáles son las circunstancias que aquejan a los pobladores. Estos proyectos deberían velar por la inclusión de las entidades territoriales en los espacios de diálogo y discusión con las empresas para evitar que los esfuerzos sean duplicados.
7. Considerar beneficios tributarios para empresas que presenten proyectos de posconflicto que vayan alineados con los Programas de Beneficio a las Comunidades requeridas por el Anexo F del contrato de la Agencia Nacional de Hidrocarburos (ANH).

Para las empresas:

1. Diseñar estrategias para discutir y formular proyectos de desarrollo integral regional a ser implementados durante el período de estabilización del posconflicto, que estén alineados con los acuerdos de La Habana. Antes de desarrollar iniciativas de posconflicto locales, se deben hacer proyectos piloto para verificar el seguimiento de los objetivos y aprender importantes lecciones de implementación a ser compartidas por toda la industria.
2. Diseminar públicamente las posiciones de la industria petrolera frente a las negociaciones que actualmente se realizan en La Habana. Si la industria petrolera sería una de las grandes beneficiadas de que cesen los ataques contra la infraestructura petrolera, ¿por qué no apoyar abiertamente una salida negociada al conflicto?
3. Desarrollar estrategia de comunicación pública sobre las posiciones de la industria petrolera frente a las negociaciones con el ELN.
4. Firmar convenios de colaboración con la Agencia Colombiana de Reintegración para entender formas en las cuales la industria puede unirse a las iniciativas de reintegración de desmovilizados.

Para las comunidades

1. Diseñar proyectos de desarrollo sostenible local que puedan ser presentados a los OCAD para financiar obras de beneficio social, articulando las visiones de desarrollos territoriales y alineados con los PBCs de las empresas petroleras. Articular estos proyectos en conjunto con las entidades territoriales para que los planes de y sus planes de desarrollo, planes o esquemas de ordenamiento territorial sean convergentes con las necesidades y prioridades comunitarias.
2. Formar espacios de representación democrática e interlocución permanente con las empresas que tengan la capacidad de articular prioridades a las entidades territoriales. Que estos espacios sean transparentes en cuanto a los objetivos de desarrollo y coherentes con estos en los pliegos de peticiones presentados a las empresas antes de llegar a las vías de hecho.
3. Participar de espacios de diálogo local como la ETH que puedan canalizar las peticiones ante los entes territoriales de forma legítima y acompañada.